



POSTULANTE: **BENICIA CONTRERAS CALDERON** (Expediente 15)

SEÑORES COMISIONADOS DE LA COMISION DE POSTULACION DE
CANDIDATOS PARA MAGISTRADOS DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA
2019-2024

BENICIA CONTRERAS CALDERON, de cincuenta y cinco años de edad, soltera, guatemalteca, abogada y notaria, colegiada número 4,614, de este domicilio, con Código Único de Identificación número 1892 43511 0603, extendido por el Registro Nacional de las Personas; actualmente desempeño el cargo de MAGISTRADA PRESIDENTA DE LA CORTE DE APELACIONES, DEL RAMO PENAL, EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADUANERA, calidad ya acreditada dentro del expediente arriba identificado.

En mi calidad de Magistrada Presidenta de la Corte de Apelaciones, asimismo; como Postulante para optar al cargo de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia, comparezco ante esta Comisión, conforme a lo ordenado en el artículo 20 de la Ley de Comisiones de Postulación, a presentar mis pruebas de descargo en relación al señalamiento por impedimento, a la postulación de mi persona, como Magistrada para la Corte Suprema de Justicia, presentada por **HELEN BEATRIZ MACK CHANG**, en su calidad de Presidente de la Junta Directiva y representante legal de la Fundación Myrna Mack.

Su señalamiento concreto y que a su juicio constituye un impedimento, está referido a que mi persona decidió actuar en abuso de autoridad, al conocer y resolver como Magistrada Suplente de Corte Suprema de Justicia el antejuicio número 71-2018, mediante resolución de fecha 21 de noviembre de 2018, al declarar junto con otros Magistrados Suplentes y Titulares de la Corte Suprema de Justicia, lo siguiente: "(I) NO HA LUGAR DE FORMACION DE CAUSA en contra de FELIPE ALEJOS LORENZANA, diputado del Congreso de la República de Guatemala (...)"

A consideración de la denunciante, en virtud de esta resolución judicial, no cumplo con los requisitos éticos y consecuente honorabilidad, pues esta actuación procesal de mi persona y hoy postulante ante esta Comisión, en conjunto con otros Magistrados que integramos la Corte Suprema de Justicia para dictar la resolución del 21 de noviembre de 2018, dentro del antejuicio número 71-2018, produjo repercusiones, "pues concretaron una situación de manifiesta impunidad y la imposibilidad material de que el Ministerio Público y los órganos jurisdiccionales del orden común, pudieran proceder en el marco de sus atribuciones a dilucidar la situación jurídica de Alejos".

Hizo alusión de elementos y criterios relativos a la forma de comprobar la honorabilidad, según la Corte de Constitucionalidad, Organismos Internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y legislación ordinaria. Asimismo, de las Normas de Comportamiento Ético del Organismo Judicial. Y concluye que no soy persona idónea para optar al cargo de Magistrada de la Corte Suprema de Justicia.

La denunciante, no presentó documentación alguna en relación a las actuaciones judiciales del antejuicio 71-2018, solicitando a la Comisión que la soliciten a los entes estatales donde corresponda, para que corroboren lo manifestado en su señalamiento de impedimento.

Al respecto, mi pronunciamiento y defensa que permite desvanecer ese señalamiento de impedimento para mi postulación, es el siguiente:

- i) Con el debido respeto me dirijo a ustedes Señores Comisionados y estimo pertinente indicar que en principio, señalamientos contra Jueces y Magistrados en ejercicio de la función jurisdiccional, presentados por personas particulares o personas que son sujetos procesales dentro de procesos judicializados, en los que se han dictado diferentes resoluciones, como la que mi persona dictó como Magistrada Suplente de Corte Suprema de Justicia, de fecha 21 de noviembre de 2018, dentro de las diligencias de antejuicio número 71-2018, jamás deben ni pueden constituir argumento sostenible con validez jurídica, o bien fundamento de hecho y de derecho válido para algún tipo de señalamiento que pueda configurar un impedimento para la postulante, mucho menos constituir un impedimento ético y que haga dudar de mi honorabilidad, como lo califica y afirma la denunciante HELEN BEATRIZ MACK CHANG.
- ii) Lo antes indicado deviene su pertinencia, en observancia a lo ordenado en el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, al regular **la Independencia del Organismo Judicial y potestad de juzgar**; e indicar que: *"La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones."*

Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y

a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del Organismo Judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público.

La función jurisdiccional se ejerce, con exclusividad absoluta, por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca.

Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia.
(el subrayado es nuestro).

- iii) Con fundamento en lo regulado en la Constitución Política de la República de Guatemala, el supuesto impedimento presentado por la denunciante HELEN BEATRIZ MACK CHANG, no debe ni puede proceder; en todo caso, si la resolución origina inconformidad a alguno de los sujetos procesales, para ello se encuentran regulados también en la ley, los recursos pertinentes e idóneos para que esa resolución que le es desfavorable, y que a su juicio le encuentra defectos de carácter sustantivo o procesal, pueda hacerlos valer y provocar que dicha resolución sea revisada por órgano jurisdiccional superior, todo esto dentro de un marco constitucional y de legalidad preestablecido.
- iv) La denunciante hizo cita de elementos y criterios relativos a la forma de comprobar la honorabilidad, según la Corte de Constitucionalidad, Organismos Internacionales, la Convención Americana sobre Derechos Humanos y legislación ordinaria. Asimismo, de las Normas de Comportamiento Ético del Organismo Judicial. A nuestro parecer, esas mismas citas apoyan y refrendan el principio de la imparcialidad e independencia judicial en el juez y magistrado. Esa es la connotación que tienen y jamás el ejercicio de la función jurisdiccional de resolver, independientemente el resultado de la decisión judicial asumida, incurriría en un comportamiento no ético y consecuente falta de honorabilidad.
- v) **Es importante mencionar que en relación a la imparcialidad e independencia judicial, la Corte de Constitucionalidad ha considerado en las sentencias de fechas veintiocho de marzo de dos mil tres y nueve de febrero de dos mil cuatro, emitidas dentro de los expedientes mil seiscientos uno guión dos mil dos y mil ochocientos sesenta y siete guión dos mil tres, respectivamente que: "... En lo que al fondo del asunto se refiere, si bien el sistema legal de supervisión de la conducta y actuar de los jueces en su función permite ejercer sobre**

ellos un control que garantice la efectiva administración de justicia, tal control se ejerce primordialmente sobre cuestiones de hecho que implican incumplimiento en la función de administrar justicia recta y cumplida, es decir, no implica una vía para atacar el acertado o desacertado fundamento o criterio sustentado por el juez al emitir una resolución, ni una posibilidad que se abre para que las partes contendientes en un proceso la utilicen ante cualquier inconformidad con las resoluciones judiciales, pues para ello cada ley procesal regula un sistema de recursos para atacar las resoluciones con las cuales se tenga inconformidad...”.

Así mismo, se ha afirmado por la Corte de Constitucionalidad que el hecho de que el juez dicte resoluciones dentro del proceso, es una facultad enmarcada en la esfera de actividades que la ley otorga al juzgador, lo cual, salvo prueba en contrario, no evidencia parcialidad de su parte. (sentencia de fecha 21 de abril de 2006 dentro del expediente 1236-2006).

Y dicha Corte ha enfatizado en reconocer como legítima la función de interpretación y aplicación de la ley por parte de las autoridades jurisdiccionales y, en ese sentido, aquellas pueden emitir decisiones que, aún no siendo favorables a determinados sujetos procesales, no patentizan violación a derechos fundamentales garantizados por la Ley Suprema. (sentencia de fecha 25 de noviembre de 2009 dentro del expediente 3513-2009).

Y concluye que de conformidad con el artículo 203 de la Constitución Política de la República de Guatemala, la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado corresponde con exclusividad e independencia a los tribunales de justicia, circunstancia que no configura violación alguna por el hecho de que lo resuelto por un tribunal de la jurisdicción ordinaria, actuando en ejercicio de sus facultades legales, no le sea favorable, tal puntualización se encuentra apoyada por el criterio de la Honorable Corte de Constitucionalidad (expedientes 895-2000, 294-2002, 203-2004, sentencias de fechas, dieciocho de diciembre de dos mil uno, ocho de enero de dos mil tres, catorce de junio de dos mil cuatro, respectivamente).

- vi) Por lo anterior, no puede señalarse como impedimento la supuesta falta de calidad ética, falta de honorabilidad, falta de imparcialidad y falta de independencia judicial, por el simple hecho de resolver un asunto en el

cual la resolución no se adecúa a intereses determinados de algún sujeto procesal o de alguna persona en particular, **siendo importante destacar que la resolución es colegiada y no fue emitida de forma unipersonal y que existen recursos procesales a los cuales las partes pueden hacer uso de ellos en su momento procesal.** Es de indicarles Señores Comisionados, que a la presente fecha, dicho proceso aún se encuentra para su conocimiento y correspondiente resolución por dictar una instancia superior, que es la Corte de Constitucionalidad.

- vii) Me he permitido presentar mi postulación, porque estimo poseer los méritos y requisitos de ley para el cargo de Magistrada de Corte Suprema de Justicia, **pertenezco a la Carrera Judicial**, iniciándola en el año de 1991 a 1995, como Jueza de Paz, de 1997 al 2014 le doy continuidad como Jueza de Primera Instancia y del 2014 a la fecha, como Magistrada de Corte de Apelaciones; aproximadamente por 25 años he ejercido la función jurisdiccional y mi récord laboral y profesional es impecable, tengo compromiso y vocación por la judicatura, por lo que una resolución judicial como la señalada y con la que se pretende fundamentar un impedimento, no puede prosperar, por no constituir ninguna evidencia idónea para demeritar aspectos de ética o de honorabilidad, por estar vinculada e inherente a una función jurisdiccional.
- viii) En atención, en cumplimiento y aplicación de lo que comprende el aspecto ético, según el artículo 12 de la Ley de la Comisiones de Postulación, relacionados con la moral, honorabilidad, rectitud, independencia e imparcialidad comprobadas con toda la documentación exigida en esta normativa y que fue debidamente presentada y acreditada por mi persona a esa Comisión, no está demás indicarlo que como Jueza de Primera Instancia se me practicó la evaluación del desempeño por parte del Consejo de la Carrera Judicial en tres oportunidades y mi desempeño aportó resultados de **MUY BUENO**, de lo cual acompañé a mi expediente copia legalizada de estas evaluaciones.

Asimismo, la evaluación practicada por el Consejo de la Carrera Judicial, en mi cargo de Magistrada de Sala, período anual 2018-2019, su resultado fue **SOBRESALIENTE**.

Estas evaluaciones de carácter interno, las cuales he superado con resultados positivos, es una muestra de mi desempeño en el ejercicio de la judicatura y magistratura, lo que me permite afirmar la mala fe existente

60 (Poder)

en la entidad denunciante a través de su representante legal, por lo tanto, al enterarlos de la realidad procesal de ese antejuicio y que a continuación me permito exponerlo, debe ser desestimada esa denuncia y mantenerme en el listado de candidatos para el cargo de Magistrada de Corte Suprema de Justicia.

ESTADO PROCESAL DEL ANTEJUICIO NUMERO 71-2018

- 1) Dicho lo anterior, rindo un informe actualizado sobre las diligencias de antejuicio identificado con el número 71-2018, promovidas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), contra el señor Felipe Alejos Lorenzana, en su calidad de Diputado del Congreso de la República de Guatemala; por estar referido el impedimento en relación a este antejuicio. Es necesario indicar que la denunciante Helen Mack Chang y/o la Fundación Myrna Mack, no son sujeto procesal en estas diligencias de antejuicio.
- 2) Estimo importante hacer del conocimiento de los señores Comisionados, el estado procesal de esas actuaciones, toda vez que los sujetos procesales han acudido a hacer valer sus recursos procesales que la ley les permite; por ello, **la resolución del 21 de noviembre de 2018, fue impugnada mediante acciones de amparo en única instancia, números 6224 y 6289-2018, tramitado en la Corte de Constitucionalidad y esta Corte, en resolución del 16 de mayo del 2019, la anuló y ordenó a la Corte Suprema de Justicia emitir una nueva resolución; es decir, que la resolución del 21 de noviembre de 2018 quedó sin valor y efectos jurídicos.**
- 3) En cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad, **la Corte Suprema de Justicia emite una nueva resolución, con fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve y ésta es la resolución vigente a la fecha;** la que también fue objeto de impugnación mediante acción de amparo en única instancia, identificado con el número 3488-2019, Oficial 7º, en tal virtud las actuaciones se encuentran en la Corte de Constitucionalidad, para lo que tenga a bien resolver en cuanto a la resolución del 20 de mayo de 2019.
- 4) Por lo anterior, Señores Comisionados, pueden establecer lo espurio del contenido de la denuncia presentada. Como lo indiqué al inicio de mi exposición, son resoluciones dictadas dentro de una función jurisdiccional, susceptibles de revisión a través de la interposición oportuna de los recursos permitidos por la ley; **actividad impugnativa que las partes legitimadas en**

las diligencias de antejuicio la han realizado, y por lo mismo, la resolución del 20 de mayo de 2019, a la fecha, no ha causado ejecutoria, no ha adquirido firmeza, encontrándose en período de prueba a la presente fecha.

MEDIOS DE PRUEBA

Ofrezco como medios de prueba, adjunto al presente escrito, los documentos siguientes:

- 1) Fotocopias Certificadas por el Secretario General de la Corte de Constitucionalidad, de fecha nueve de septiembre de dos mil diecinueve, que reproducen las resoluciones emitidas por la Corte Suprema de Justicia, de fechas veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho y, veinte de mayo de dos mil diecinueve, dentro de las diligencias de antejuicio número 71-2018.
- 2) Fotocopia simple del memorial presentado por Nester Mauricio Vásquez Pimentel, en su calidad de Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, con el cual remite a la honorable Corte de Constitucionalidad, en fecha 28 de diciembre de 2018, el expediente original del antejuicio 71-2018, en virtud de la acción de amparo número 6224-2018, Oficial 7º, relacionada con la resolución del 21 de noviembre de 2018.
- 3) Fotocopia simple del memorial presentado por Nester Mauricio Vásquez Pimentel, en su calidad de Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, con el cual remite a la honorable Corte de Constitucionalidad, en fecha 27 de junio de 2019, el expediente original del antejuicio 71-2018, en virtud de la acción de amparo número 3488-2019, relacionada con la resolución del 20 de mayo de 2019.
- 4) Fotocopia simple de la resolución de fecha veintiuno de enero de dos mil veinte, dictada por la Corte de Constitucionalidad, en calidad de Tribunal Extraordinario de Amparo, dentro del Expediente de amparo número 3488-2019 Oficial 7º, mediante la cual se ordena abrir a prueba dicho amparo; resolución que fuera notificada a la Corte Suprema de Justicia, el veinticuatro de enero de dos mil veinte, de la cual también se acompaña fotocopia simple del acta de la notificación.

En conclusión, con las explicaciones propias y vinculadas con las diligencias de antejuicio número 71-2018 y prueba documental aportada, se evidencian los aspectos eminentemente de carácter jurisdiccional, en ejercicio de tal función; quedando en consecuencia, desvirtuado el contenido fáctico que supuestamente fundara un impedimento para la postulación al cargo de Magistrada de Corte Suprema de Justicia.

PETICION:

- 1) Se admita para su trámite el presente escrito y se tenga por evacuada la audiencia conferida a efecto de presentar mis pruebas de descargo relacionada con la denuncia presentada por HELEN BEATRIZ MACK CHANG, en su calidad de representante legal de la Fundación Myrna Mack, en contra de mi persona, como POSTULANTE PARA MAGISTRADA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA.
- 2) Se tenga por ofrecida e incorporada la prueba individualizada en el apartado respectivo, constituyendo la misma suficiente y eficaz prueba de descargo y en consecuencia tener por desestimada la denuncia presentada por HELEN BEATRIZ MACK CHANG, en su calidad de representante legal de la Fundación Myrna Mack.
- 3) En consecuencia, una vez declarada la desestimación de la mencionada denuncia, por parte de la Comisión de Postulación para Magistrados de la Corte Suprema de Justicia 2019-2024, se ordene mantenerme dentro de los candidatos postulantes a dicha Magistratura.

Guatemala, 10 de febrero de 2020.


ABOGADA BENICIA CONTRERAS CALDERON
POSTULANTE

PRUEBA

No. 1



1272
10 Des
ANTEJUICIO
71-2018

Página 1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Guatemala, veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho.

I) Se integra esta Corte con los magistrados suscritos. II) Se tienen a la vista para resolver las diligencias de **ANTEJUICIO** promovidas por el **MINISTERIO PÚBLICO** y la **COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA**, en contra del señor **FELIPE ALEJOS LORENZANA**, en su calidad de diputado del Congreso de la República de Guatemala.

I. DE LA DENUNCIA:

Los denunciantes al plantear las diligencias de Antejuicio, se fundamentaron en los hechos siguientes: a) durante el período comprendido del año dos mil catorce al mes de abril del año dos mil quince, existió una asociación de personas dedicadas profesionalmente al ejercicio del crimen, dividida funcionalmente en dos grupos: por una parte, servidores públicos y funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria y por la otra, agentes externos que fueron empleados en la citada entidad pública, así como por sujetos que poseían contactos dentro de la institución y entre otros individuos, citaron al diputado Felipe Alejos Lorenzana. Estos últimos ofrecían a diversos empresarios exportadores un portafolio de servicios de gestión ante la Superintendencia de Administración Tributaria para agilizar sus solicitudes de devolución de crédito fiscal y con la intervención del señor Giovanni Marroquín Navas y sus contactos, obtenían un trámite preferencial y expedito en los respectivos expedientes, recibiendo comisiones ilícitas que al final y de común acuerdo, se repartían entre ellos (servidores públicos e intermediarios); b) que el dignatario denunciado era quien manejaba el portafolio de clientes integrado por las entidades: Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Anónima y Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima a las cuales prometió una tramitación ágil y eficiente de sus solicitudes de devolución de crédito fiscal, indicándoles que él tenía la ventaja de que *"conocía a la gente para ayudarlos en el tema"*; **c)** que el diputado antejuiciado, con su actuar pudo haber incurrido en los ilícitos penales de: **c.1)** tráfico de influencias regulado en el artículo 449 BIS del Código Penal, ya que actuando como intermediario, se aprovechó de su amistad y la que el señor Giovanni Marroquín tenía con servidores de la Superintendencia de Administración Tributaria, con el propósito de obtener para sí y para terceros, beneficios indebidos; asimismo, porque aceptó en pago una tarifa de éxito sobre la gestión; **c.2)** cohecho activo, previsto en el artículo 442 del Código Penal, en virtud que indirectamente, por medio de Giovanni Marroquín, ofreció beneficios económicos a servidores públicos de la administración tributaria, a título de regalo o pago para obtener un trámite expedito o preferencial en las solicitudes de devolución de crédito fiscal de las entidades Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima y Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima. **d)** Señalaron los denunciantes, que para demostrar la anterior hipótesis, tomaron en cuenta los cuadros informativos hallados en el dispositivo electrónico que le sustrajeron al señor Giovanni Marroquín Navas, en el momento de su captura el día quince de abril del año dos mil quince, los cuales revelaban información respecto de expedientes de devolución de crédito fiscal que la organización criminal que dirigía el mismo, tramitaba ante la Superintendencia aludida. En tales gráficas se podía evidenciar que entre los clientes de la estructura se encontraban las entidades Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima y Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima, entre otras, y que en las mismas, así como en

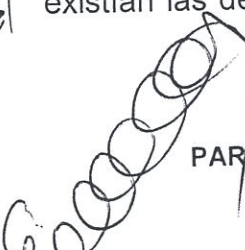


agendas y papeles sueltos de Giovanni Marroquín Navas, encontrados durante allanamientos a sus domicilios y oficinas e información bancaria, evidenciaron que existía un complejo sistema criminal, del que él mismo fue eje fundamental y del que también hizo parte importante el diputado antejuiciado y para sustentar tales aseveraciones, indicaron los denunciantes que acompañaban informes de un análisis criminal y financiero, que explicaba suficientemente la manera en que dicha organización criminal operó; e) asimismo señalaron los antejuiciantes que el día de la captura, le encontraron a Giovanni Marroquín otros dispositivos electrónicos que contenían información que evidenciaba la relación asociativa-criminal con servidores públicos de la Superintendencia de Administración Tributaria y agentes externos intermediarios, específicamente refiriéndose al diputado antejuiciado como "Filipao"; y que existían comunicaciones de audio y de texto entre ellos de los abonados celulares que ambos utilizaban, correspondientes a los números cuarenta millones nueve mil ciento dieciséis (40009116) y cincuenta y cuatro millones seiscientos seis mil setecientos setenta y uno (54606771) que evidenciaban su relación de conocimiento, amistad, cercanía, así como también el vínculo de asociación próximo a la Superintendencia de Administración Tributaria, en virtud de varias solicitudes de devolución de crédito fiscal, especialmente de las entidades Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima y Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima; f) la participación del funcionario antejuiciado, se evidenciaba de los análisis de varios expedientes de devolución de crédito fiscal, ya que en los cuadros de clientes, gestiones y comisiones de Giovanni Marroquín Navas, se tenía un trámite preferencial dentro de la administración tributaria; sobre tal argumento, manifestaron los antejuiciantes que existían las declaraciones testimoniales rendidas por el gerente general y gerente


CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
GUATEMALA, C.A.

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA







comercial de la entidad Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima, quienes manifestaron que fue el antejuiciado quien les ofreció los servicios de *"su gente"* y que ellos los aceptaron, comprometiéndose a pagar una tarifa de éxito que no alcanzaron a fijar, porque al salir a la luz el caso *"la línea"* dicha negociación se interrumpió tras la captura de *"la gente con la que él estaba trabajando las devoluciones de crédito fiscal"*; g) agregaron los denunciantes que uno de los miembros de la organización criminal que fungía como servidor público de la administración tributaria, contrató a un abogado para interponer acciones constitucionales contra la misma, bajo la premisa de que el Organismo Judicial iba a ordenar la designación de auditores para acelerar los procedimientos de solicitudes de devolución de crédito fiscal; auditores que usualmente eran nombrados en dependencias de la Intendencia de Fiscalización a cargo de otro servidor público, previo a que fueran emitidas las sentencias de amparo respectivas, ya que las mismas quedaban sin materia y eran resueltas sin lugar. En esas particulares condiciones ---señalaron los denunciantes--- que las interposiciones de las acciones constitucionales se interpretaban como un simple ardid, para aparentar legalidad en la agilización de los expedientes; sin embargo, derivado de la captura de Giovanni Marroquín Navas, se interrumpió el cumplimiento del trato entre la entidad Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima y el dignatario antejuiciado, ya que su *"gente"* había sido capturada, para acreditar dichos extremos los gerentes de las compañías aludidas entregaron documentación al aludido dignatario de la Nación para que agilizará el trámite de los expedientes correspondientes, pero quien hizo el seguimiento dentro de la administración tributaria fue Giovanni Marroquín Navas, tal y como quedó evidenciado en diversas conversaciones telefónicas; h) que entre



el flujo de los pagos en dinero a favor de la organización criminal, aparecía un evento que revestía singular importancia, que fue el hecho que los amparos interpuestos en relación a los expedientes de la entidad Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima fueron planteados a ruego, por el abogado Luis Felipe Hernández González, contratado por quien fungió como intendente jurídico de la administración tributaria en esa época; sin embargo sus honorarios eran cancelados por el señor Marroquín Navas por medio de cheques de empresas que tenía bajo su control, representadas por amigos o familiares, por lo que se consideraba que el diputado antejuiciado formaba parte de una sociedad del crimen organizado, por la que posteriormente pudo haber incurrido en el delito de asociación ilícita previsto en el artículo 4, numeral 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada (Decreto 21-2006 del Congreso de la República de Guatemala).

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, solicitaron las presentes diligencias de Antejuicio, al considerar que el diputado del Congreso de la República de Guatemala, Felipe Alejos Lorenzana, en ejercicio del cargo pudo haber incurrido en la probable comisión de hechos que pudieran resultar ser ilícitos y que den lugar a la formación de causa penal en su contra, según la información que consta en el expediente que contiene las presentes diligencias de Antejuicio, reflejados en la posible participación indirecta de su parte, por medio del señor Giovanni Marroquín Navas, en el ofrecimiento a servidores públicos de la Superintendencia de Administración Tributaria beneficios económicos a título de regalo o pago, para que dentro de las solicitudes de devolución de crédito fiscal de las entidades mercantiles Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima y Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Gordo, Sociedad Anónima, en ejercicio de sus funciones públicas, dichos servidores les dieran un trámite expedito o preferencial; así como también en la posible participación, con la intervención del señor Giovanni Marroquín Navas y sus "conectes", de obtener un trámite preferencial y expedito dentro de los expedientes relacionados, a cambio de recibir un beneficio económico (tarifa de éxito) por parte de sus clientes (exportadores beneficiarios de las devoluciones del crédito fiscal aludido) el cual se repartían entre ellos y que se configuraría en ilícitos penales.

II. DE LA INHIBITORIA:

a) El Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal del Organismo Judicial, con fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, recibió las diligencias de antejuicio presentadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, remitiendo las actuaciones al Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, quien en resolución del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho se inhibió de conocer y ordenó que se remitieran las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que procediera de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley en Materia de Antejuicio.

b) El antejuiciado presentó ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, actividad procesal defectuosa la cual fue declarada sin lugar en resolución del catorce de febrero de dos mil dieciocho. En contra de lo resuelto presentó reposición la cual fue rechazada *in limine* en resolución del veintidós de febrero de dos mil dieciocho.



c) El denunciado también presentó incidente de inconstitucionalidad parcial en caso concreto y el juez de primera instancia relacionado en auto del uno de marzo de dos mil dieciocho lo rechazó *in limine*.

d) Asimismo solicitó que las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, Delia Marina Dávila Salazar y María Eugenia Morales Aceña, se excusaran de conocer las diligencias de antejuicio promovidas en su contra y esta Corte en resolución del cuatro de abril de dos mil dieciocho hizo constar que la funcionarias judiciales no aceptaban las causales invocadas y que se continuara con el trámite del expediente.

e) También con fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho presentó recusación con expresión de causa en contra de los magistrados que integran esta Corte. Con fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho este Tribunal rechazó la recusación planteada.

f) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, esta Corte admitió para su trámite las diligencias de Antejuicio y nombró como juez pesquisidor a Jorge Antonio Valladares Arévalo, Vocal Primero de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, para que efectuara las investigaciones correspondientes, extremos que obran en la pieza II del folio trescientos sesenta y dos al trescientos sesenta y nueve del expediente identificado en el acápite.

g) Con fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho el juez pesquisidor emitió resolución en la que ordenó continuar con el trámite de las diligencias y citó a: los denunciantes, Rodrigo Presa Riera, David Carlos Ekman Khan y al funcionario antejuiciado, extremo que consta a folios trescientos ochenta y nueve y trescientos noventa, pieza II.

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



h) El funcionario denunciado planteó recusación y el pesquisidor en auto del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, no la aceptó y ordenó que las actuaciones se elevaran a esta Corte. Este Tribunal en resolución del seis de junio de dos mil dieciocho rechazó la recusación y ordenó que el expediente se le devolviera al juez pesquisidor. En contra de lo resuelto el señor Felipe Alejos Lorenzana planteó reposición la cual fue rechazada por improcedente en resolución del siete de junio de dos mil dieciocho.

i) El presidente de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en resolución del catorce de junio de dos mil dieciocho informó a esta Corte que el juez pesquisidor nombrado se encontraba en su período vacacional del siete al veinticinco de junio de dos mil dieciocho.

j) Con fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho el juez pesquisidor emitió resolución en la que ordenó continuar con el trámite de las diligencias y citó nuevamente a: los denunciantes, Rodrigo Presa Riera, David Carlos Ekman Khan y al funcionario antejuiciado, extremo que consta del folio cuatrocientos setenta y cuatro al cuatrocientos setenta y cinco, pieza III.

k) El funcionario denunciado planteó nuevamente recusación y el pesquisidor en auto del diez de julio de dos mil dieciocho, no la aceptó y ordenó que las actuaciones se elevaran a esta Corte. Este Tribunal en resolución del diecisiete de julio de dos mil dieciocho rechazó la recusación planteada y ordenó que se devolvieran las actuaciones al juez pesquisidor para que prosiguiera con el trámite correspondiente, tal como consta en los folios quinientos cincuenta y cuatro al quinientos cincuenta y siete de la pieza III.

l) El antejuiciado recusó nuevamente a los magistrados de esta Corte, la cual



fue rechazada *in limine* en resolución del diecisiete de julio de dos mil dieciocho, tal como consta del folio quinientos cuarenta y nueve al quinientos cincuenta y tres, pieza III.

m) En resolución de fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho el juez pesquisador ordenó que se continuara con el trámite de las diligencias y citó nuevamente a: los denunciados, Rodrigo Presa Riera, David Carlos Ekman Khan y al funcionario antejuiciado, extremo que consta a folio seiscientos treinta y cinco de la pieza IV.

n) El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho el juez pesquisador emitió resolución citando nuevamente al funcionario denunciado para que compareciera a la audiencia del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, obrante al folio mil setenta y cuatro de la pieza VI.

o) Se hace constar que en las actuaciones el antejuiciado presentó diez recusaciones las cuales no fueron aceptadas por el juez pesquisador y se rechazaron *in limine* por la Corte Suprema de Justicia.

p) El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho el juez pesquisador emitió resolución citando nuevamente al funcionario denunciado para que compareciera a la audiencia de fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, extremo que consta al folio mil noventa y cuatro de la pieza VI.

q) El juez pesquisador en resolución del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho en el numeral romano segundo, le hizo saber al antejuiciado que: "...Se le indica al presentado que de conformidad con el artículo 19, numeral 5 de la Ley en Materia de Antejuicio, y del análisis y conteo de las actuaciones, el plazo para remitir el informe circunstanciado al Órgano que la comisionó vence el día **nueve de noviembre de dos mil dieciocho**, derivado, del planteamiento

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



de una serie de recusaciones, en contra, del suscrito, que paralizaron constantemente este procedimiento, asimismo, el periodo de vacaciones autorizado a su persona, el cual se dejo (sic) constancia en autos...”, extremo que obra al folio mil ciento noventa y ocho de la pieza VI del expediente de amparo.

r) El funcionario antejuiciado presentó conflicto de jurisdicción y el juez pesquisidor en resolución del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho lo rechazó por notoriamente improcedente.

s) El juez pesquisidor emitió informe circunstanciado que fue recibido por esta Corte con fecha seis de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual concluyó que no era recomendable retirarle la inmunidad al antejuiciado, en virtud de no obrar medios de convicción suficientes en el expediente que acreditaran la comisión de los ilícitos penales imputados.

III. DE LAS PESQUISAS EFECTUADAS EN LAS DILIGENCIAS DE ANTEJUICIO:

a) Con fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, el juez pesquisidor ordenó citar a: **a.i)** el Ministerio Público para el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho; **a.ii)** la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para el día veintiuno de agosto de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos; **a.iii)** Rodrigo Presa Riera y David Carlos Ekman Khan para el día veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho y **a.iv)** al antejuiciado, Felipe Alejos Lorenzana para que compareciera el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, extremo que consta al folio seiscientos treinta y cinco, pieza IV del expediente identificado en el acápite.

b) **DECLARACIÓN DE ANDREI VLADIMIR GONZÁLEZ ARTEAGA**, agente

1277 1277



fiscal del Ministerio Público, Fiscalía Especial contra la Impunidad, que tuvo verificativo el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, por medio de la cual ratificó la denuncia presentada, la cual obra en la pieza número IV del folio seiscientos cincuenta y siete al seiscientos sesenta y uno.

c) **DECLARACIÓN DE ASTRID ODETE ESCOBEDO BARRONDO**, mandataria judicial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que se llevó a cabo el veintiuno de agosto del año en curso, diligencia en la que ratificó la denuncia presentada y solicitó que se declarara con lugar el antejuicio planteado; que consta del folio seiscientos noventa y dos al seiscientos noventa y seis, pieza número IV.

d) **DECLARACIÓN DE RODRIGO PRESA RIERA**, que tuvo verificativo el veinticuatro de agosto del año en curso, diligencia en la que ratificó las declaraciones testimoniales de fechas veintitrés de agosto del año dos mil diecisiete y once de enero del año dos mil dieciocho, obrante del folio setecientos treinta al setecientos treinta y tres de la pieza número IV.

e) **DECLARACIÓN DE DAVID CARLOS EKMAN KHAN**, que tuvo verificativo el veinticuatro de agosto del año en curso, diligencia en la que ratificó la declaración testimonial del dos de abril del año dos mil diecisiete, obra del folio setecientos treinta y cinco al setecientos treinta y ocho de la pieza número IV del expediente de mérito.

f) **INFORME PRESENTADO POR LA ENTIDAD INGENIO PALO GORDO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, el cual fue requerido por el juez pesquisador con fecha veinte de agosto de dos mil dieciocho y se tuvo por recibido por medio de resolución del trece de septiembre de dos mil dieciocho, tal como consta a folio ochocientos trece de la pieza V.

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
GUATEMALA, C.A.

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



g) El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho el juez pesquisidor emitió resolución citando nuevamente al funcionario denunciado para que compareciera a la audiencia del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, extremo que consta al folio mil noventa y cuatro de la pieza VI del expediente de mérito. El funcionario antejuiciado no compareció a la diligencia señalada, presentando sus argumentos de defensa por medio de informe escrito el cual obra del folio mil ciento setenta y dos al mil ciento noventa y seis de la pieza número VI del expediente identificado en el acápite.

IV. DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE:

- a) Oficio SGO guion cero uno guion dos mil dieciocho de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, de la encargada del despacho de la Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral, donde consta el listado de los diputados electos para el período dos mil dieciséis al dos mil veinte al Congreso de la República de Guatemala por el partido político TODOS, siendo electo y adjudicado el cargo al señor Felipe Alejos Lorenzana.
- b) Copia simple de la certificación extendida por el secretario del Congreso de la República de Guatemala, de la sesión celebrada el catorce de enero de dos mil dieciséis, donde consta que Felipe Alejos Lorenzana, tomó posesión del cargo de diputado para la legislatura del año dos mil dieciséis al dos mil veinte. Obrante del folio mil ciento veinte al mil ciento veintidós, pieza VI del expediente identificado en el acápite.
- c) Acta testimonial de Luis Felipe Hernández Gonzalez, que tuvo verificativo el cinco de mayo de dos mil dieciséis, que obra en la pieza número I del folio veintitrés al veinticuatro del expediente identificado en el acápite;
- d) Actas testimoniales de Rodrigo Presa Riera, de fechas veintitrés de agosto



del año dos mil diecisiete y once de enero del año dos mil dieciocho, obrantes en los folios veinticinco al veintinueve de la pieza I del expediente de mérito;

e) Acta testimonial de David Carlos Ekman Khan del dos de abril del año dos mil diecisiete, contenida en los folios treinta al treinta y uno de la pieza I del expediente de mérito;

f) Informe de extracción, referencia INF EXT cero veintidós guion SIA guion dos mil quince, de fecha veintidós de junio de dos mil quince *"Informe sobre la Extracción Forense de Información CASO M tres mil quinientos cuarenta y dos diagonal dos mil quince diagonal tres"*, firmado por Richard Arévalo, investigador analista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, obrante en la pieza número I del folio treinta y dos al cincuenta y cinco del expediente de mérito;

g) Ampliación de informe de análisis criminal de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, identificado como DEAC guion dos mil diecisiete guion cinco guion D, que obra a folios cincuenta y seis al setenta y cinco de la pieza I del expediente identificado en el acápite.

V. DEL INFORME RENDIDO POR EL JUEZ PESQUISIDOR:

El seis de noviembre de dos mil dieciocho, el juez pesquisidor presentó informe el cual obra en la pieza número VII del folio mil doscientos treinta y ocho al mil doscientos cincuenta del expediente identificado en el acápite, en el que detalló las diligencias practicadas, los documentos recabados y al analizar las actuaciones consideró que estimaba que los hechos denunciados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en el antejuicio planteado en contra de Felipe Alejos Lorenzana no eran constitutivos de delito con respecto del denunciado. Con base en lo

anteriormente indicado el pesquisidor concluyó que no era procedente que se persiguiera penalmente al diputado antejuiciado, razón por la cual recomendó no quitar la inmunidad de la que goza el diputado del Congreso de la República de Guatemala antes indicado.

CONSIDERANDO

-I-

La prerrogativa del antejuicio está instituida constitucionalmente para que los funcionarios que gozan de ella, no puedan ser objeto de persecuciones penales por actos legítimos realizados en el ejercicio de su función pública, lo que evidencia su dualidad en cuanto a ser una garantía para la continuidad y eficiencia de esa función, y una excepción al principio de igualdad en materia penal establecida en el propio texto constitucional. La Corte de Constitucionalidad en reiterados fallos ha sostenido que el antejuicio opera como una garantía para determinados funcionarios expuestos sensiblemente a incriminaciones por actos realizados en el ejercicio de su cargo y se ha instituido no sólo para protegerlos de la posible ligereza en la sindicación, sino también para que las potestades de que están investidos no sean interrumpidas injustificadamente. Es reconocido que el procedimiento de antejuicio busca preservar a los funcionarios que de él gozan, de acciones tendenciosas o maliciosas, pretendiendo exigirles responsabilidad criminal.

-II-

El artículo 161 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que los diputados del Congreso de la República de Guatemala, gozarán de la prerrogativa de inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, lo anterior si la Corte Suprema de Justicia no declara

1270 1270
ANTEJUICIO

71-2018

Página 15



previamente que ha lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto.

La Ley en Materia de Antejuicio, Decreto 85-2002 del Congreso de la República de Guatemala, dispone en su artículo 3° que el antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable y que los dignatarios y funcionarios públicos gozan del beneficio de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa.

En el presente caso, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, solicitaron las diligencias de Antejuicio, al considerar que al diputado del Congreso de la República de Guatemala, Felipe Alejos Lorenzana, pudo haber incurrido en la probable comisión de hechos ilícitos y que den lugar a la formación de causa penal en su contra, según la información que consta en el expediente, reflejados en la posible participación indirecta de su parte, por medio del señor Giovanni Marroquín Navas, en el ofrecimiento a servidores públicos de la Superintendencia de Administración Tributaria beneficios económicos a título de regalo o pago, para que dentro de las solicitudes de devolución de crédito fiscal de las entidades mercantiles Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima e Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima, en ejercicio de sus funciones públicas, dichos servidores les dieran un trámite expedito o preferencial; así como también en la posible participación, con la intervención del señor Giovanni Marroquín Navas y sus "conectes", de obtener un trámite preferencial y expedito dentro de los expedientes relacionados, a cambio de recibir un beneficio económico (tarifa de éxito) por parte de sus clientes

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
GUATEMALA, C.A.



PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

(exportadores beneficiarios de las devoluciones del crédito fiscal aludido) las cuales se repartían entre ellos, configurándose dicho proceder en ilícitos penales.

-III-

Esta Corte del análisis de los antecedentes, medios de convicción aportados, normas legales antes relacionadas y en concordancia con las determinaciones rendidas por el juez pesquisidor, concluye que en el presente caso no existen indicios suficientes que puedan sustentar la posibilidad de que el diputado del Congreso de la República de Guatemala, Felipe Alejos Lorenzana, pudo haber incurrido en actos que probablemente pudieran revestir las características de delitos, en virtud de obrar elementos de razonabilidad con los que se determina lo siguiente: **a)** no se demostró en el expediente que existiera autorización judicial para que se procediera a la extracción forense practicada a los números telefónicos cincuenta y cuatro millones seiscientos seis mil setecientos setenta y uno (54606771) y cuarenta millones nueve mil ciento dieciséis (40009116) contenida en el Informe de extracción, referencia INF EXT cero veintidós guion SIA guion dos mil quince, del veintidós de junio de dos mil quince "*Informe sobre la Extracción Forense de Información CASO M tres mil quinientos cuarenta y dos diagonal dos mil quince diagonal tres*", firmado por Richard Arévalo, investigador analista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, obrante en la pieza número I del folio treinta y dos al cincuenta y cinco del expediente de mérito y su respectiva ampliación de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho; **b)** no se acreditó fehacientemente que el número telefónico cuarenta millones nueve mil ciento dieciséis (40009116) estuviere asignado al diputado antejuicidado, pues se determinó por medio del informe rendido por la

1286
ANTEJUICIO

71-2018

Página 17



empresa Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima, de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, que la línea telefónica antes relacionada se encuentra a nombre de Luis Antonio Yaquian, de la entidad de Enlace de Asuntos Estatales, Asuntos Corporativos, tal como consta a folio setenta de la pieza I del expediente de amparo, además no consta documento alguno en el cual se le hubiere entregado el referido aparato telefónico al diputado Felipe Alejos Lorenzana; c) no obran elementos de razonabilidad que demuestren que el denunciado ejerció presión alguna sobre las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, para que agilizaran los expedientes de reintegro de crédito fiscal, ya que únicamente se hacía referencia de "filipao" y "Felipe"; d) no se demostró que el denunciado hubiere ejercido ningún tipo de influencia sobre los magistrados integrantes de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativa, en los expedientes de amparos relacionados con devoluciones de créditos fiscales y e) no obra documentación financiera que acredite que el antejuiciado hubiere recibido las comisiones que supuestamente fueron requeridas. Aunado a todo lo anterior los procedimientos que se llevaron a cabo por parte del ente investigador vulneraron los derechos constitucionales del denunciado, ya que estos no se llevaron conforme lo dispuesto por los artículos 1 y 63 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, pues no obra en el expediente autorización judicial alguna que dispusiere la interceptación de las líneas telefónicas antes relacionadas.

Del análisis de lo anteriormente indicado, de la relación y estudio de las actuaciones obrantes en autos, la normativa legal citada, se establece que no existen razones suficientes que fundamenten la procedencia del antejuicio y la

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
GUATEMALA, C.A.

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



declaratoria de ha lugar a formación de causa. En virtud de que los hechos denunciados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, carecen de viabilidad, en consecuencia no ha lugar a formación de causa en contra del diputado antejuiciado. En ese orden de ideas y con fundamento en los elementos de razonabilidad aportados es procedente declarar sin lugar el antejuicio relacionado.

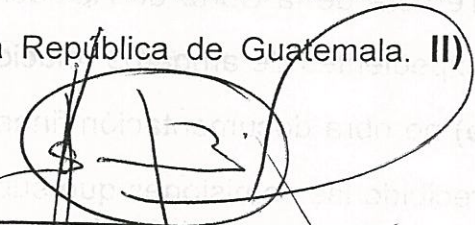
NORMAS LEGALES QUE SUSTENTAN ESTE FALLO

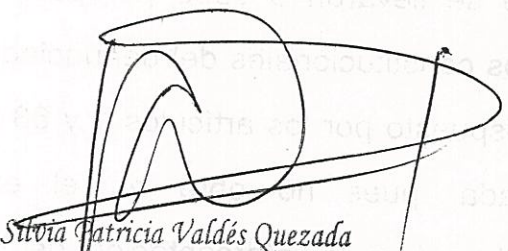
Artículos citados y 206 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 77 de la Ley del Organismo Judicial; 1, 2, 4, 10, 12, 14 literal a) y 19 de la Ley en Materia de Antejuicio.

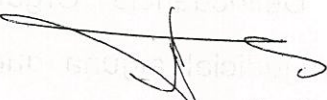
POR TANTO

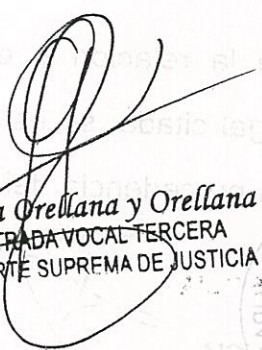
LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, con base en lo considerado y en las leyes citadas, al resolver por mayoría DECLARA: **I) NO HA LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA** en contra de **FELIPE ALEJOS LORENZANA**, diputado del Congreso de la República de Guatemala. **II)**

Notifíquese y archívese el presente expediente.


Msc. Nester Mauricio Vásquez Pimentel
Presidente del Organismo Judicial
y de la Corte Suprema de Justicia


Silvia Patricia Valdés Quezada
MAGISTRADA VOCAL PRIMERA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Dr. Nery Osvaldo Medina Méndez
MAGISTRADO VOCAL SEGUNDO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Vitalina Orellana y Orellana
MAGISTRADA VOCAL TERCERA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

128
Poco ha lugar
ANTEJUICIO
71-2018




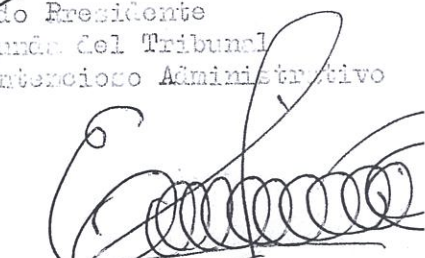
19

Página 19

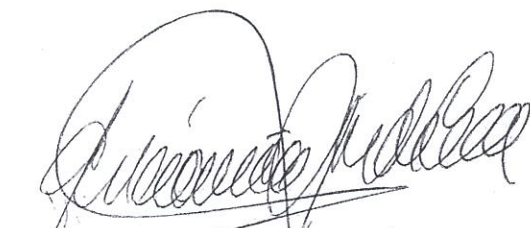

Benicia Contreras Calderón
MAGISTRADA PRESIDENTE
SALA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO
PENAL, EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADUANERA



Domingo Albán Fajardo
Magistrado Presidente
Sala Segunda del Tribunal
de lo Contencioso Administrativo

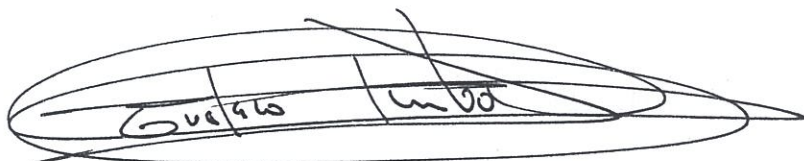

Sergio Amadeo Pineda Castañeda
MAGISTRADO VOCAL SEXTO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Harold Estuardo Ortiz Peres
Magistrado Presidente
Sala Segunda de la Corte de
Apelaciones del Ramo Penal
de Procesos de Mayor Riesgo
y Extinción de Dominio.

**CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA**
GUATEMALA, C.A.


Silvia Verónica García Molina
MAGISTRADA VOCAL OCTAVA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Jaime Amílcar González Dávila
Presidente
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal,
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente


Gustavo Adolfo Dubón Gálvez
MAGISTRADO PRESIDENTE
SALA SEGUNDA DE LA CORTE DE APELACIONES
DEL RAMO PENAL, NARCOACTIVIDAD Y DELITOS
CONTRA EL AMBIENTE,
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA


**Voto Presidente y
Juzgado**
M.A. María Eugenia Morales Aceña
MAGISTRADA VOCAL DECIMA SEGUNDA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



M.A. Manuel Duarte Barrera
MAGISTRADO VOCAL DÉCIMO TERCERO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Licda. Cecilia Odette Moscoso Arriaza de Salazar
SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



VOTO RAZONADO DISIDENTE DE LA ABOGADA MARÍA EUGENIA MORALES ACEÑA, MAGISTRADA VOCAL XII DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTIUNO DE NOVIEMBRE DE DOS MIL DIECIOCHO, DICTADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DENTRO DEL ANTEJUICIO NÚMERO SETENTA Y UNO GUIÓN DOS MIL DIECIOCHO (71-2018).

La suscrita no comparte el sentido y argumentaciones sostenidas por los Magistrados y Magistradas integrantes de la Corte Suprema de Justicia, quienes resuelven "NO HA LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA, en contra de FELIPE ALEJOS LORENZANA, diputado del Congreso de la República de Guatemala...", en el expediente de antejuicio arriba identificado. Por lo que en ejercicio de la potestad que por delegación constitucional que estoy investida procedo a razonar voto, con la finalidad de cumplir con la función instrumental de certeza y previsibilidad de derecho, valores ligados a la tutela de la autonomía individual y característico de la cultura política y jurídica de la modernidad, así como de la decisión racional, la cual está fundamentada debidamente por el interponente, así como con la documentación y archivos propuestos, herramientas valiosas para facilitar el control interno, endoprocesal de legalidad y toma de mi decisión jurídica. La Honorable Corte de Constitucionalidad en concordancia con la Ley de Antejuicio, ha manifestado que: "...Al respecto se puede sostener que, la garantía otorgada a los dignatarios y funcionarios públicos para no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal, no busca blindar a la persona que la ostenta, al grado de ser impune, sino por el contrario, al requerirse que una autoridad competente declare que ha lugar a formación de causa, lo que se pretende es que la referida autoridad verifique que los señalamientos no son espurios, ilegítimos o



políticos y que solamente pretenden entorpecer el desempeño de la función pública...” (Sentencia de fecha 18 de enero de 2018, dentro del expediente 5384-2017). Los indicios encontrados en las actuaciones, detallados con total claridad en la solicitud de antejuicio, permiten descartar fehacientemente que los hechos denunciados respondan a cuestiones espurias, políticas o ilegítimas; resultando evidente, por el contrario, que se trata de hechos que presumiblemente podrían configurarse en ilícitos.

La resolución de mérito en su página 13 específicamente en su numeral romano V. detalla el informe el cual fue rendido por el Juez Pesquisidor, quien dentro de sus actuaciones recibió las declaraciones testimoniales de los señores Luis Felipe Hernández González, Rodrigo Presa Riera y David Carlos Ekman Khan, informe sobre la extracción forense de información, con numero de referencia EXT022-SIA-2015 de fecha uno de junio de dos mil quince, entre otros, los cuales fundamentaron su decisión al indicar : *“.... se concluye que el antejuiciado señor Felipe Alejos Lorenzana no recibió ni entregó ningún pago, tampoco influenció por sí o por interpósita persona a ningún funcionario público para obtener la agilización de crédito fiscal a favor de las entidades Ingenio Palo Gordo Sociedad Anónima y Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima, pues ambas entidades lo desvinculan de dichas acciones, en similares términos se expresaron los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al negar alguna influencia, lo expuesto, en lugar de fortalecer las evidencias que describe el ente investigador, las desvanece...”*.

El informe anteriormente detallado, sirvió para que esta Corte Suprema de Justicia considerará en la página 16 de la resolución de mérito que: *“..a) No se demostró en el expediente que existiera autorización judicial para que se procediera a la*



extracción forense practicada a los números telefónicos cincuenta y cuatro millones seiscientos seis mil setecientos setenta y uno (54606771) y cuarenta millones nueve mil ciento dieciséis (40009116) contenida en el Informe de extracción, referencia INF EXT cero veintidós guion SIA guion dos mil quince, del veintidós de junio de dos mil quince "informe sobre la Extracción Forense de Información CASO M tres mil quinientos cuarenta y dos diagonal dos mil quince diagonal tres", firmado por Richard Arévalo, investigador analista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, obrante en la pieza número I del folio treinta y dos al cincuenta y cinco del expediente de mérito y su respectiva ampliación de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho; b) no se acreditó fehacientemente que el número telefónico cuarenta millones nueve mil ciento dieciséis (40009116) estuviere asignado al diputado antejuiciado, pues se determinó por medio del informe rendido por la empresa Comunicaciones Celulares, Sociedad Anónima, de fecha veintisiete de febrero de dos mil diecisiete, que la línea telefónica antes relacionado se encuentra a nombre de Luis Antonio Yaquian, de la entidad Enlace de Asuntos Estatales, Asuntos Corporativos, tal como consta a folio setenta de la pieza I del expediente de amparo, además no consta documento alguno en el cual se le hubiere entregado el referido aparato telefónico al diputado Felipe Alejos Lorenzana; c) no obran elementos de razonabilidad que demuestren que el denunciado ejerció presión alguna sobre las autoridades de la Superintendencia de Administración Tributaria, para que agilizaran los expedientes de reintegro de crédito fiscal, ya que únicamente se hacía referencia de "filpao" y "Felipe"; d) no se demostró que el denunciado hubiere ejercido ningún tipo de influencia sobre los magistrados integrantes de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativa, en los expedientes de amparo relacionados con



devoluciones de crédito fiscales y e) no obra documentación financiera que acredite que el antejuiciado hubiere recibido las comisiones que supuestamente fueron requeridas. Aunado a todo lo anterior los procedimientos que se llevaron a cabo por parte del ente investigados vulneraron los derechos constitucionales del denunciado, ya que estos no se llevaron conforme lo dispuesto por los artículos 1 y 63 de la Ley Contra la Delincuencia Organizada, pues no obra en el expediente autorización judicial alguna que dispusiere la interceptación de las líneas telefónicas antes relacionadas.”.

En base a lo anterior hay que indicar que el antejuicio es un instrumento habilitante de los procesos penales. La presunción de fidelidad de los funcionarios públicos a la Constitución no descarta la posibilidad de autenticidad de las acusaciones que contra ellos se realicen, esto sin vulnerar el derecho fundamental de presunción de inocencia que ostentamos todos y todas las personas en la República, entendiendo que el antejuicio no busca atribuir responsabilidades, sino que se establece como una acción de carácter administrativo, además, que no se pronuncia con autoridad de cosa juzgada sobre una violación a la ley, sino solamente sobre el hecho de existir indicios suficientes para que un órgano jurisdiccional pueda conocer sobre la posible responsabilidad o no, de una persona investida de esta inmunidad personal.

Por lo cual la Corte Suprema de Justicia, únicamente se encuentra facultada para establecer la existencia de tales indicios, y así determinar si ha formación de causa o no, por lo cual no puede verificar aspectos procesales que serían materia eminentemente de actuación del órgano jurisdiccional al momento de conocer el proceso penal, en virtud que como se recalcó estamos ante un procedimiento administrativo, por ello las posibles falencias o deficiencias procesales únicamente



0000038

4202
1200

22

(P200)

GUATEMALA, C.A.

deberían ser impugnadas durante el proceso correspondiente.

El Juez pesquisidor en su informe, en ningún momento se pronuncia sobre los indicios documentales, encontrados durante el allanamiento efectuado durante la captura del señor Giovanni Marroquin, en el cual se le incautaron, dispositivos electrónicos que contenían comunicaciones de audio y texto entre este y el antejuiciado, lo cual presupone una vinculación entre ellos. Asimismo, omite realizar un análisis sobre los informes financieros presentados por la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala –CICIG- y el Ministerio Público, los cuales constituyen indicios reales sobre los aspectos denunciados, consecuente deviene concluir que existen razones suficientes que fundamentan la procedencia del antejuicio, y su declaratoria de ha lugar a formación de causa del diputado antejuicio.

Considerando que la figura del antejuicio doctrinariamente es una prerrogativa, es decir un permiso, un beneficio o una dispensa que se otorga a una persona respecto a un determinado asunto, por lo cual no debe ser motivo de impunidad. Y esta Corte Suprema de Justicia ha indicado que el contenido del informe del juez pesquisidor no puede ser vinculante para la decisión tomada en esta fase administrativa, consecuentemente se establece la existencia de indicios suficientes que podrían sustentar la posibilidad que el diputado del Congreso de la Republica de Guatemala, Felipe Alejos Lorenzana pudo haber incurrido en actos que probablemente revisten características de delitos.

Por las consideraciones realizadas anteriormente, respetando, pero no compartiendo el criterio de la mayoría, dejo constancia expresa de mi disenso, ya que por los argumentos esgrimidos se establece que se debió resolver ha lugar la formación de causa en contra del Felipe Alejos Lorenzana.



Solicitando que este voto disidente sea notificado juntamente con la resolución.





129B

ANTEJUICIO
71-2018

23

Página 1

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA. Guatemala, veinte de mayo de dos mil diecinueve.

I) Se integra esta Corte con los magistrados suscritos. II) En acatamiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad en auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve emitido en los expedientes de amparos acumulados números 6224 y 6289-2018, se tienen a la vista para resolver las diligencias de **ANTEJUICIO** promovidas por el **MINISTERIO PÚBLICO** y la **COMISIÓN INTERNACIONAL CONTRA LA IMPUNIDAD EN GUATEMALA**, en contra del señor **FELIPE ALEJOS LORENZANA**, en su calidad de diputado del Congreso de la República de Guatemala.

I. DE LA DENUNCIA:

Los denunciantes al plantear las diligencias de Antejuicio, se fundamentaron en los hechos siguientes: a) durante el período comprendido del año dos mil catorce al mes de abril del año dos mil quince, existió una asociación de personas dedicadas profesionalmente al ejercicio del crimen, dividida funcionalmente en dos grupos: por una parte, servidores públicos y funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria y por la otra, agentes externos que fueron empleados en la citada entidad pública, así como por sujetos que poseían contactos dentro de la institución y entre otros individuos, citaron al diputado Felipe Alejos Lorenzana. Estos últimos ofrecían a diversos empresarios exportadores un portafolio de servicios de gestión ante la Superintendencia de Administración Tributaria para agilizar sus solicitudes de devolución de crédito fiscal y con la intervención del señor Giovanni Marroquín Navas y sus contactos, obtenían un trámite preferencial y expedito en los respectivos expedientes, recibiendo comisiones ilícitas que al final y de común acuerdo, se repartían entre ellos (servidores públicos e

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



14

intermediarios); **b)** que el dignatario denunciado era quien manejaba el portafolio de clientes integrado por las entidades: Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima y Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima a las cuales prometió una tramitación ágil y eficiente de sus solicitudes de devolución de crédito fiscal, indicándoles que él tenía la ventaja de que *"conocía a la gente para ayudarlos en el tema"*; **c)** que el diputado antejuiciado, con su actuar pudo haber incurrido en los ilícitos penales de: **c.1)** tráfico de influencias regulado en el artículo 449 *Bis* del Código Penal, ya que actuando como intermediario, se aprovechó de su amistad y la que el señor Giovanni Marroquín tenía con servidores de la Superintendencia de Administración Tributaria, con el propósito de obtener para sí y para terceros, beneficios indebidos; asimismo, porque aceptó en pago una tarifa de éxito sobre la gestión; **c.2)** cohecho activo, previsto en el artículo 442 del Código Penal, en virtud que indirectamente, por medio de Giovanni Marroquín, ofreció beneficios económicos a servidores públicos de la administración tributaria, a título de regalo o pago para obtener un trámite expedito o preferencial en las solicitudes de devolución de crédito fiscal de las entidades Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima y Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima. **d)** Señalaron los denunciantes, que para demostrar la anterior hipótesis, tomaron en cuenta los cuadros informativos hallados en el dispositivo electrónico que le sustrajeron al señor Giovanni Marroquín Navas, en el momento de su captura el día quince de abril del año dos mil quince, los cuales revelaban información respecto de expedientes de devolución de crédito fiscal que la organización criminal que dirigía el mismo, tramitaba ante la Superintendencia aludida. En tales gráficas se podía evidenciar que entre los clientes de la estructura se encontraban las entidades Compañía



**ANTEJUICIO
71-2018**

24

Página 3

11

Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima y Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima, entre otras, y que en las mismas, así como en agendas y papeles sueltos de Giovanni Marroquín Navas, encontrados durante allanamientos a sus domicilios y oficinas e información bancaria, evidenciaron que existía un complejo sistema criminal, del que él mismo fue eje fundamental y del que también hizo parte importante el diputado antejuiciado y para sustentar tales aseveraciones, indicaron los denunciantes que acompañaban informes de un análisis criminal y financiero, que explicaba suficientemente la manera en que dicha organización criminal operó; e) asimismo señalaron los antejuiciantes que el día de la captura, le encontraron a Giovanni Marroquín otros dispositivos electrónicos que contenían información que evidenciaba la relación asociativa-criminal con servidores públicos de la Superintendencia de Administración Tributaria y agentes externos intermediarios, específicamente refiriéndose al diputado antejuiciado como "Filipao"; y que existían comunicaciones de audio y de texto entre ellos de los abonados celulares que ambos utilizaban, correspondientes a los números cuarenta millones nueve mil ciento dieciséis (40009116) y cincuenta y cuatro millones seiscientos seis mil setecientos setenta y uno (54606771) que evidenciaban su relación de conocimiento, amistad, cercanía, así como también el vínculo de asociación próximo a la Superintendencia de Administración Tributaria, en virtud de varias solicitudes de devolución de crédito fiscal, especialmente de las entidades Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima y Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima; f) la participación del funcionario antejuiciado, se evidenciaba de los análisis de varios expedientes de devolución de crédito fiscal, ya que en los cuadros de clientes, gestiones y comisiones de Giovanni Marroquín Navas, se tenía un trámite preferencial dentro de la

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
GUATEMALA, C.A.

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



15

administración tributaria; sobre tal argumento, manifestaron los antejuiciantes que existían las declaraciones testimoniales rendidas por el gerente general y gerente comercial de la entidad Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima, quienes manifestaron que fue el antejuiciado quien les ofreció los servicios de *"su gente"* y que ellos los aceptaron, comprometiéndose a pagar una tarifa de éxito que no alcanzaron a fijar, porque al salir a la luz el caso *"la línea"* dicha negociación se interrumpió tras la captura de *"la gente con la que él estaba trabajando las devoluciones de crédito fiscal"*; g) agregaron los denunciante que uno de los miembros de la organización criminal que fungía como servidor público de la administración tributaria, contrató a un abogado para interponer acciones constitucionales contra la misma, bajo la premisa de que el Organismo Judicial iba a ordenar la designación de auditores para acelerar los procedimientos de solicitudes de devolución de crédito fiscal; auditores que usualmente eran nombrados en dependencias de la Intendencia de Fiscalización a cargo de otro servidor público, previo a que fueran emitidas las sentencias de amparo respectivas, ya que las mismas quedaban sin materia y eran resueltas sin lugar. En esas particulares condiciones ---señalaron los denunciante--- que las interposiciones de las acciones constitucionales se interpretaban como un simple ardid, para aparentar legalidad en la agilización de los expedientes; sin embargo, derivado de la captura de Giovanni Marroquín Navas, se interrumpió el cumplimiento del trato entre la entidad Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima y el dignatario antejuiciado, ya que su *"gente"* había sido capturada, para acreditar dichos extremos los gerentes de las compañías aludidas entregaron documentación al aludido dignatario de la Nación para que agilizará el trámite de los expedientes correspondientes, pero quien hizo el



130a
**ANTEJUICIO
71-2018**

25 (pro)

Página 5

11

seguimiento dentro de la administración tributaria fue Giovanni Marroquín Navas, tal y como quedó evidenciado en diversas conversaciones telefónicas; h) que entre el flujo de los pagos en dinero a favor de la organización criminal, aparecía un evento que revestía singular importancia, que fue el hecho que los amparos interpuestos en relación a los expedientes de la entidad Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima fueron planteados a ruego, por el abogado Luis Felipe Hernández González, contratado por quien fungió como intendente jurídico de la administración tributaria en esa época; sin embargo sus honorarios eran cancelados por el señor Marroquín Navas por medio de cheques de empresas que tenía bajo su control, representadas por amigos o familiares, por lo que se consideraba que el diputado antejuiciado formaba parte de una sociedad del crimen organizado, por la que posteriormente pudo haber incurrido en el delito de asociación ilícita previsto en el artículo 4, numeral 2 de la Ley contra la Delincuencia Organizada (Decreto 21-2006 del Congreso de la República de Guatemala).

El Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, solicitaron las presentes diligencias de Antejuicio, al considerar que el diputado del Congreso de la República de Guatemala, Felipe Alejos Lorenzana, en ejercicio del cargo pudo haber incurrido en la probable comisión de hechos que pudieran resultar ser ilícitos y que den lugar a la formación de causa penal en su contra, según la información que consta en el expediente que contiene las presentes diligencias de Antejuicio, reflejados en la posible participación indirecta de su parte, por medio del señor Giovanni Marroquín Navas, en el ofrecimiento a servidores públicos de la Superintendencia de Administración Tributaria beneficios económicos a título de regalo o pago, para que dentro de las

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



solicitudes de devolución de crédito fiscal de las entidades mercantiles Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima y Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima, en ejercicio de sus funciones públicas, dichos servidores les dieran un trámite expedito o preferencial; así como también en la posible participación, con la intervención del señor Giovanni Marroquín Navas y sus "conectes", de obtener un trámite preferencial y expedito dentro de los expedientes relacionados, a cambio de recibir un beneficio económico (tarifa de éxito) por parte de sus clientes (exportadores beneficiarios de las devoluciones del crédito fiscal aludido) el cual se repartían entre ellos y que se configuraría en ilícitos penales.

II. DE LA INHIBITORIA:

a) El Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal del Organismo Judicial, con fecha veinticinco de enero de dos mil dieciocho, recibió las diligencias de antejuicio presentadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, remitiendo las actuaciones al Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, quien en resolución del treinta y uno de enero de dos mil dieciocho se inhibió de conocer y ordenó que se remitieran las actuaciones a la Corte Suprema de Justicia para que procediera de conformidad con lo establecido en el artículo 16 de la Ley en Materia de Antejuicio.

b) El antejuiciado presentó ante el Juzgado Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente del departamento de Guatemala, actividad procesal defectuosa la cual fue declarada sin lugar en resolución del catorce de febrero de dos mil dieciocho. En contra de lo resuelto presentó



ANTEJUICIO
71-2018

26

(P)

Página 7

reposición la cual fue rechazada *in limine* en resolución del veintidós de febrero de dos mil dieciocho.

c) El denunciado también presentó incidente de inconstitucionalidad parcial en caso concreto y el juez de primera instancia relacionado en auto del uno de marzo de dos mil dieciocho lo rechazó *in limine*.

d) Asimismo solicitó que las magistradas de la Corte Suprema de Justicia, Delia Marina Dávila Salazar y María Eugenia Morales Aceña, se excusaran de conocer las diligencias de antejuicio promovidas en su contra y esta Corte en resolución del cuatro de abril de dos mil dieciocho hizo constar que la funcionarias judiciales no aceptaban las causales invocadas y que se continuara con el trámite del expediente.

e) También con fecha cuatro de abril de dos mil dieciocho presentó recusación con expresión de causa en contra de los magistrados que integran esta Corte. Con fecha dieciocho de abril de dos mil dieciocho este Tribunal rechazó la recusación planteada.

f) El veinticinco de abril de dos mil dieciocho, esta Corte admitió para su trámite las diligencias de Antejuicio y nombró como juez pesquisidor a Jorge Antonio Valladares Arévalo, Vocal Primero de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, para que efectuara las investigaciones correspondientes, extremos que obran en la pieza II del folio trescientos sesenta y dos al trescientos sesenta y nueve del expediente identificado en el acápite.

g) Con fecha diecisiete de mayo de dos mil dieciocho el juez pesquisidor emitió resolución en la que ordenó continuar con el trámite de las diligencias y citó a: los denunciantes, Rodrigo Presa Riera, David Carlos Ekman Khan y al

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
GUATEMALA, C.A.

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



funcionario antejuiciado, extremo que consta a folios trescientos ochenta y nueve y trescientos noventa, pieza II.

h) El funcionario denunciado planteó recusación y el pesquisidor en auto del veintiuno de mayo de dos mil dieciocho, no la aceptó y ordenó que las actuaciones se elevaran a esta Corte. Este Tribunal en resolución del seis de junio de dos mil dieciocho rechazó la recusación y ordenó que el expediente se le devolviera al juez pesquisidor. En contra de lo resuelto el señor Felipe Alejos Lorenzana planteó reposición la cual fue rechazada por improcedente en resolución del siete de junio de dos mil dieciocho.

i) El presidente de la Sala Cuarta de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente en resolución del catorce de junio de dos mil dieciocho informó a esta Corte que el juez pesquisidor nombrado se encontraba en su período vacacional del siete al veinticinco de junio de dos mil dieciocho.

j) Con fecha veintiséis de junio de dos mil dieciocho el juez pesquisidor emitió resolución en la que ordenó continuar con el trámite de las diligencias y citó nuevamente a: los denunciantes, Rodrigo Presa Riera, David Carlos Ekman Khan y al funcionario antejuiciado, extremo que consta del folio cuatrocientos setenta y cuatro al cuatrocientos setenta y cinco, pieza III.

k) El funcionario denunciado planteó nuevamente recusación y el pesquisidor en auto del diez de julio de dos mil dieciocho, no la aceptó y ordenó que las actuaciones se elevaran a esta Corte. Este Tribunal en resolución del diecisiete de julio de dos mil dieciocho rechazó la recusación planteada y ordenó que se devolvieran las actuaciones al juez pesquisidor para que prosiguiera con el trámite correspondiente, tal como consta en los folios quinientos cincuenta y





ANTEJUICIO
71-2018

27 *por*

Página 9

cuatro al quinientos cincuenta y siete de la pieza III.

l) El antejuiciado recusó nuevamente a los magistrados de esta Corte, la cual fue rechazada *in limine* en resolución del diecisiete de julio de dos mil dieciocho, tal como consta del folio quinientos cuarenta y nueve al quinientos cincuenta y tres, pieza III.

m) En resolución de fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho el juez pesquisador ordenó que se continuara con el trámite de las diligencias y citó nuevamente a: los denunciados, Rodrigo Presa Riera, David Carlos Ekman Khan y al funcionario antejuiciado, extremo que consta a folio seiscientos treinta y cinco de la pieza IV.

n) El diecisiete de octubre de dos mil dieciocho el juez pesquisador emitió resolución citando nuevamente al funcionario denunciado para que compareciera a la audiencia del diecinueve de octubre de dos mil dieciocho, obrante al folio mil setenta y cuatro de la pieza VI.

o) Se hace constar que en las actuaciones el antejuiciado presentó diez recusaciones las cuales no fueron aceptadas por el juez pesquisador y se rechazaron *in limine* por la Corte Suprema de Justicia.

p) El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho el juez pesquisador emitió resolución citando nuevamente al funcionario denunciado para que compareciera a la audiencia de fecha veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, extremo que consta al folio mil noventa y cuatro de la pieza VI.

q) El juez pesquisador en resolución del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho en el numeral romano segundo, le hizo saber al antejuiciado que:

"...Se le indica al presentado que de conformidad con el artículo 19, numeral 5 de la Ley en Materia de Antejuicio, y del análisis y conteo de las actuaciones, el

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



[Handwritten signature]

plazo para remitir el informe circunstanciado al Órgano que la comisionó vence el día **nueve de noviembre de dos mil dieciocho**, derivado, del planteamiento de una serie de recusaciones, en contra, del suscrito, que paralizaron constantemente este procedimiento, asimismo, el periodo de vacaciones autorizado a su persona, el cual se dejó (sic) constancia en autos...”, extremo que obra al folio mil ciento noventa y ocho de la pieza VI del expediente de amparo.

r) El funcionario antejuiciado presentó conflicto de jurisdicción y el juez pesquisador en resolución del veintinueve de octubre de dos mil dieciocho lo rechazó por notoriamente improcedente.

s) El magistrado pesquisador emitió informe circunstanciado que fue recibido por esta Corte con fecha seis de noviembre de dos mil dieciocho, en el cual concluyó que no era recomendable retirarle la inmunidad al antejuiciado, en virtud de no obrar medios de convicción suficientes en el expediente que acreditaran la comisión de los ilícitos penales imputados.

III. DE LAS PESQUISAS EFECTUADAS EN LAS DILIGENCIAS DE ANTEJUICIO:

a) Con fecha nueve de agosto de dos mil dieciocho, el juez pesquisador ordenó citar a: a.i) el Ministerio Público para el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho; a.ii) la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala para el día veintiuno de agosto de dos mil dieciocho a las diez horas con treinta minutos; a.iii) Rodrigo Presa Riera y David Carlos Ekman Khan para el día veinticuatro de agosto de dos mil dieciocho y a.iv) al antejuiciado, Felipe Alejos Lorenzana para que compareciera el treinta y uno de agosto de dos mil dieciocho, extremo que consta al folio seiscientos treinta y cinco, pieza IV del



1306
**ANTEJUICIO
71-2018**

28

Página 11

expediente identificado en el acápite.

b) **DECLARACIÓN DE ANDREI VLADIMIR GONZÁLEZ ARTEAGA**, agente fiscal del Ministerio Público, Fiscalía Especial contra la Impunidad, que tuvo verificativo el diecisiete de agosto de dos mil dieciocho, por medio de la cual ratificó la denuncia presentada, la cual obra en la pieza número IV del folio seiscientos cincuenta y siete al seiscientos sesenta y uno.

c) **DECLARACIÓN DE ASTRID ODETE ESCOBEDO BARRONDO**, mandataria judicial de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, que se llevó a cabo el veintiuno de agosto del año en curso, diligencia en la que ratificó la denuncia presentada y solicitó que se declarara con lugar el antejudio planteado; que consta del folio seiscientos noventa y dos al seiscientos noventa y seis, pieza número IV.

d) **DECLARACIÓN DE RODRIGO PRESA RIERA**, que tuvo verificativo el veinticuatro de agosto del año en curso, diligencia en la que ratificó las declaraciones testimoniales de fechas veintitrés de agosto del año dos mil diecisiete y once de enero del año dos mil dieciocho, obrante del folio setecientos treinta al setecientos treinta y tres de la pieza número IV.

e) **DECLARACIÓN DE DAVID CARLOS EKMAN KHAN**, que tuvo verificativo el veinticuatro de agosto del año en curso, diligencia en la que ratificó la declaración testimonial del dos de abril del año dos mil diecisiete, obra del folio setecientos treinta y cinco al setecientos treinta y ocho de la pieza número IV del expediente de mérito.

f) **INFORME PRESENTADO POR LA ENTIDAD COMPAÑIA AGRÍCOLA INDUSTRIAL INGENIO PALO GORDO, SOCIEDAD ANÓNIMA**, el cual fue requerido por el juez pesquisador con fecha veinte de agosto de dos mil

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



dieciocho y se tuvo por recibido por medio de resolución del trece de septiembre de dos mil dieciocho, tal como consta a folio ochocientos trece de la pieza V.

g) El diecinueve de octubre de dos mil dieciocho el juez pesquisador emitió resolución citando nuevamente al funcionario denunciado para que compareciera a la audiencia del veintitrés de octubre de dos mil dieciocho, extremo que consta al folio mil noventa y cuatro de la pieza VI del expediente de mérito. El funcionario antejuiciado no compareció a la diligencia señalada, presentando sus argumentos de defensa por medio de informe escrito el cual obra del folio mil ciento setenta y dos al mil ciento noventa y seis de la pieza número VI del expediente identificado en el acápite.

IV. DOCUMENTOS QUE OBRAN EN EL EXPEDIENTE:

a) Oficio SGO guion cero uno guion dos mil dieciocho de fecha doce de enero de dos mil dieciocho, de la encargada del despacho de la Secretaría General del Tribunal Supremo Electoral, donde consta el listado de los diputados electos para el período dos mil dieciséis al dos mil veinte al Congreso de la República de Guatemala por el partido político TODOS, siendo electo y adjudicado el cargo al señor Felipe Alejos Lorenzana.

b) Copia simple de la certificación extendida por el secretario del Congreso de la República de Guatemala, de la sesión celebrada el catorce de enero de dos mil dieciséis, donde consta que Felipe Alejos Lorenzana, tomó posesión del cargo de diputado para la legislatura del año dos mil dieciséis al dos mil veinte. Obrante del folio mil ciento veinte al mil ciento veintidós, pieza VI del expediente identificado en el acápite.

c) Acta testimonial de Luis Felipe Hernández Gonzalez, que tuvo verificativo el



1307
ANTEJUICIO
71-2018

29 p/01

Página 13

cinco de mayo de dos mil dieciséis, que obra en la pieza número I del folio veintitrés al veinticuatro del expediente identificado en el acápite;

d) **Actas testimoniales de Rodrigo Presa Riera, de fechas veintitrés de agosto del año dos mil diecisiete y once de enero del año dos mil dieciocho**, obrantes en los folios veinticinco al veintinueve de la pieza I del expediente de mérito;

e) **Acta testimonial de David Carlos Ekman Khan del dos de abril del año dos mil diecisiete**, contenida en los folios treinta al treinta y uno de la pieza I del expediente de mérito;

f) **Informe de extracción, referencia INF EXT cero veintidós guion SIA guion dos mil quince, de fecha veintidós de junio de dos mil quince "Informe sobre la Extracción Forense de Información CASO M tres mil quinientos cuarenta y dos diagonal dos mil quince diagonal tres"**, firmado por Richard Arévalo, investigador analista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, obrante en la pieza número I del folio treinta y dos al cincuenta y cinco del expediente de mérito;

g) **Ampliación de informe de análisis criminal de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho, identificado como DEAC guion dos mil diecisiete guion cinco guion D**, que obra a folios cincuenta y seis al setenta y cinco de la pieza I del expediente identificado en el acápite.

V. DEL INFORME RENDIDO POR EL JUEZ PESQUISIDOR:

El seis de noviembre de dos mil dieciocho, el juez pesquisidor presentó informe el cual obra en la pieza número VII del folio mil doscientos treinta y ocho al mil doscientos cincuenta del expediente identificado en el acápite, en el que detalló las diligencias practicadas, los documentos recabados y al analizar las actuaciones consideró que estimaba que los hechos denunciados por el

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en el antejuicio planteado en contra de Felipe Alejos Lorenzana no eran constitutivos de delito con respecto del denunciado al emitir las conclusiones siguientes: "...En el presente caso, se tienen las siguientes:

DECLARACIONES: a) Rodrigo Presa Riera, quien en su deposición expresó que no se pagó nada al señor Felipe Alejos y él tampoco cobró, por lo que la negociación nunca se dio; y b) David Carlos Ekman Khan, expuso que no se negoció ni se pagó al antejuiciado y tampoco solicitó pago alguno, adicionalmente expuso que las devoluciones de crédito fiscal se diligencian (sic) a través de un reconocido bufete de Abogados que no tienen ninguna relación con el antejuiciado.

DOCUMENTOS: a) Se vincula al antejuiciado con una acción de amparo presentada para la devolución fiscal, sin embargo no se presentó evidencia que él de manera personal o por tercera persona haya requerido los servicios del abogado que presentó dicha acción, adicionalmente se tiene Certificación de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT-, donde aparece que en el año dos mil catorce se presentaron ochenta y dos (82) acciones de Amparo y en el año dos mil quince se presentaron doscientas noventa y ocho (298) acciones de Amparo, todas constantes y recurrentes que provienen de distintas entidades relacionadas a la devolución de crédito fiscal, por lo que, el amparo que se describe en las presentes diligencias, no es un caso aislado; b) informe suscrito por el Representante Legal de la entidad Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima, donde informa que por concepto de Agilización de crédito fiscal no se efectuó ninguna clase de pagos al señor Felipe Alejos Lorenzana (...) y d) Informe rendido por los Honorables Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, a través del cual exponen que no ha recibido ningún tipo de influencias e injerencia



1305
ANTEJUICIO
71-2018

30 (pki)

Página 15

11

por parte del antejuiciado en la tramitación de los expedientes referentes a la devolución de crédito fiscal. Como podrán apreciar los (...) como derivación de lo expuesto, se torna imprósperable un juicio penal, por lo que atendiendo al principio de objetividad, se concluye que el antejuiciado señor Felipe Alejos Lorenzana no recibió ni entregó ningún pago, tampoco influenció por sí o por interpósita persona a ningún funcionario público para obtener la agilización de crédito fiscal a favor de las entidades Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima y Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima, pues ambas entidades lo desvinculan de dichas acciones, en similares términos se expresaron los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al negar alguna influencia, lo expuesto, en lugar de fortalecer las evidencias que describe el ente investigador, las desvanece..." (sic).

Con base en lo anteriormente indicado el pesquisidor determinó que no era procedente que se persiguiera penalmente al funcionario antejuiciado, razón por la cual recomendó no quitar la inmunidad de la que goza el diputado del Congreso de la República de Guatemala Felipe Alejos Lorenzana.

CONSIDERANDO

-I-

Con el objeto de analizar las presentes diligencias de antejuicio, esta Corte Suprema de Justicia señala inicialmente que la institución del antejuicio es considerada doctrinariamente como una prerrogativa; es decir, un permiso, un beneficio o una dispensa que se otorga a una persona respecto de determinado asunto. De esa cuenta el abogado guatemalteco Francisco Fonseca Penedo, en su libro "El Derecho de Antejuicio", puntualiza: "Esto quiere decir que hay algunos funcionarios que gozan de una especial prerrogativa, no concedida a la

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



generalidad de las personas y que consiste en que antes de que puedan ser enjuiciados criminalmente, aun cuando halla acusación de parte interesada, deben cumplirse ciertos requisitos previos para obtener una declaración, dictada por autoridad competente, de que ha lugar a formación de causa criminal contra el funcionario. Para obtener esta declaratoria es preciso tramitar diligencias especialmente encaminadas a ese fin. Si la petición se resuelve en el sentido de que ha lugar a formación de causa, ya puede iniciarse la acusación; pero si se declara que no ha lugar, se produce un obstáculo legal que impide el enjuiciamiento del funcionario". De otra parte, el autor Raúl Goldstein, en el Diccionario de Derecho Penal y Criminología, define el Antejudio como el: "privilegio de carácter procesal, por el cual se establecen determinadas condiciones extraordinarias para el procesamiento de una persona, consistentes en la sustracción temporal del sujeto a la ley procesal común, como el desafuero del legislador, del juez, del presidente, y sólo tiene el alcance de un impedimento que posterga el proceso común hasta que se haya producido el desafuero o la destitución.". Así mismo, el jurista Eduardo J. Couture, en su obra denominada Vocabulario Jurídico, define el antejudio como un "Procedimiento preliminar al juicio de responsabilidad judicial, tendiente a calificar prima facie la admisibilidad de la acusación o demanda...".

El Derecho de Antejudio, al ser una figura jurídica de naturaleza pública que se origina en la Constitución Política de la República de Guatemala y que se regula por una ley de orden público - Ley en Materia de Antejudio-, contiene en sí mismo elementos o atributos que determinan el ejercicio de dicho derecho por parte de los dignatarios y funcionarios públicos que gozan de tal prerrogativa; dichos atributos son normados por el artículo 3 de la Ley en Materia de Antejudio, Decreto 85-2002 del Congreso de la República de



ANTEJUICIO
71-2018

31

PRO

Página 17

Guatemala, que indica: *"El antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable"*. (El resaltado es propio).

De igual manera, el artículo citado define el antejuicio como la garantía que la Constitución Política de la República otorga a los dignatarios y funcionarios públicos, de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa. Dicho procedimiento previo, conforme a lo establecido en el artículo 4 de la citada normativa, puede iniciarse por medio de las siguientes acciones: *"El antejuicio se origina por denuncia ante el juez de paz o querella presentada ante juez de primera instancia..."*; así mismo, el artículo referido establece que: *"...La denuncia o querella podrá ser presentada por cualquier persona a la que le conste la comisión de un acto o hecho constitutivo de delito por parte de un dignatario o funcionario público, y no simplemente por razones espurias, políticas o ilegítimas"*.

-II-

El artículo 161 inciso a) de la Constitución Política de la República de Guatemala, establece que los diputados del Congreso de la República de Guatemala, gozarán de la prerrogativa de inmunidad personal para no ser detenidos ni juzgados, lo anterior si la Corte Suprema de Justicia no declara previamente que ha lugar a formación de causa, después de conocer el informe del juez pesquisidor que deberá nombrar para el efecto.

En el presente caso, el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, solicitaron las diligencias de Antejuicio, al considerar que el diputado del Congreso de la República de Guatemala, Felipe Alejos Lorenzana, pudo haber incurrido en la probable comisión de hechos ilícitos y que

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



den lugar a la formación de causa penal en su contra, según la información que consta en el expediente, reflejados en la posible participación indirecta de su parte, por medio del señor Giovanni Marroquín Navas, en el ofrecimiento a servidores públicos de la Superintendencia de Administración Tributaria beneficios económicos a título de regalo o pago, para que dentro de las solicitudes de devolución de crédito fiscal de las entidades Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima y Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima, en ejercicio de sus funciones públicas, dichos servidores les dieran un trámite expedito o preferencial; así como también en la posible participación, con la intervención del señor Giovanni Marroquín Navas y sus "conectes", de obtener un trámite preferencial y expedito dentro de los expedientes relacionados, a cambio de recibir un beneficio económico (tarifa de éxito) por parte de sus clientes (exportadores beneficiarios de las devoluciones del crédito fiscal aludido) las cuales se repartían entre ellos, configurándose dicho proceder en ilícitos penales (obran en la pieza I del folio uno al quince del expediente de mérito).

-III-

La Ley en Materia de Antejuicio, Decreto 85-2002 del Congreso de la República de Guatemala, dispone en su artículo 3º que el Antejuicio es un derecho inherente al cargo, inalienable, imprescriptible e irrenunciable y que los dignatarios y funcionarios públicos gozan del beneficio de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a la formación de causa.

De las atribuciones del pesquisidor: con fundamento en los artículos 10 y 19 de la Ley en Materia de Antejuicio, el pesquisidor tendrá las funciones siguientes: a)



ANTEJUICIO
71-2018

32

Página 19

analizar los documentos; **b)** solicitar la ratificación de la denuncia o querella; **c)** escuchar al funcionario público o dignatario contra quien se hubiere presentado la denuncia o querella; **d)** practicar cuantas diligencias se estime pertinentes para el esclarecimiento del hecho; **e)** remitir su informe circunstanciado al órgano que la comisionó; **f)** analizar los documentos que se presenten para establecer la realidad y veracidad de los hechos; **g)** tomar declaración del denunciante o querellante así como del dignatario o funcionario público afectado, y efectuará cuanta diligencia estime pertinente; **h)** si de los hechos denunciados existen motivos suficientes para declarar que ha lugar a la formación de causa, deberá emitirse el informe correspondiente; **i)** si se declara con lugar el antejuicio el juez pesquisador remitirá el expediente a la Corte Suprema de Justicia, para que ésta a su vez, lo remita al juez competente y **j)** emitir su dictamen o informe dentro del plazo no mayor de sesenta (60) días.

De las prohibiciones del pesquisador: de conformidad con los artículos 11 y 16 de la Ley en Materia de Antejuicio, el pesquisador tiene prohibido: **a)** arrogarse facultades que competen a los jueces y Ministerio Público; **b)** tipificar un hecho como delito y **c)** determinar la culpabilidad o la inocencia del dignatario o funcionario público.

Al respecto, la Corte de Constitucionalidad ha estimado que la autoridad que conozca las diligencias de antejuicio únicamente debe declarar la existencia o no de hechos que puedan ser tipificados como ilícitos, conforme a lo preceptuado en la ley rectora del acto, en sentencia del once de julio de dos mil diecisiete emitida en el expediente número 5316-2016, señaló: "...La Ley en Materia de Antejuicio, regula el procedimiento, ámbito de aplicación, tramitación y efectos del antejuicio, el cual inicia con una denuncia o querella presentada contra algún dignatario o funcionario público

Corte Suprema
de Justicia
Guatemala, C.A.

21

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.

y finaliza con la declaratoria de si ha lugar o no a formación de causa en su contra, previo análisis de las diligencias practicadas dentro del proceso y del informe presentado por la Comisión o Juez pesquisidor, según el caso; **la autoridad que conozca de las diligencias de antejuicio únicamente declarará la existencia o no de hechos que puedan ser tipificados como delito...** (Sobresaltado es propio). Igual criterio fue sustentado por sentencia del trece de marzo y dieciséis de enero de dos mil dieciocho en los expedientes 595-2017 y 3007-2017.

-IV-

Esta Corte en acatamiento de lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad en auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve emitido en los expedientes de amparos acumulados números 6224 y 6289-2018, procede a emitir nuevo pronunciamiento en el expediente identificado en el acápite, por lo que considera pertinente indicar que las diligencias de antejuicio no prejuzgan sobre la culpabilidad o inocencia del funcionario antejuiciado, sino sobre la prosecución de un proceso penal en el que podrá hacer valer los medios de defensa que estime pertinentes y aportar las pruebas con la finalidad de que se resuelva su situación jurídica; lo cual no supone una vulneración a la presunción de inocencia. Asimismo es procedente señalar que es función primordial que en toda diligencia se respete el derecho de defensa, la garantía del debido proceso y la tutela judicial efectiva, tal como le asiste al funcionario antejuiciado y sobre todo la obligación del Estado en cuanto a garantizar la seguridad jurídica que se encuentra regulada en el artículo 2º de la Constitución Política de la República de Guatemala, el cual limita a las autoridades que en el ejercicio de sus facultades legales deben actuar en observancia del principio relacionado, respetando las leyes vigentes, con respecto a la obtención



1308

ANTEJUICIO
71-2018

33

Página 21

de medios de convicción y que oportunamente puedan ser aportados dentro de un proceso para que un juez competente pueda establecer la veracidad de los hechos denunciados, pues una acusación debe estar debidamente fundamentada a efecto de que posibilite su procedencia.

Esta Corte considera necesario hacer referencia a las conclusiones emitidas por el juez pesquisador, las cuales se transcriben a continuación: "...En el presente caso, se tienen las siguientes: **DECLARACIONES:** a) Rodrigo Presa Riera, quien en su deposición expresó que no se pagó nada al señor Felipe Alejos y él tampoco cobró, por lo que la negociación nunca se dio; y b) David Carlos Ekman Khan, expuso que no se negoció ni se pagó al antejuiciado y tampoco solicitó pago alguno, adicionalmente expuso que las devoluciones de crédito fiscal se diligencian a través de un reconocido bufete de Abogados que no tienen ninguna relación con el antejuiciado. **DOCUMENTOS:** a) Se vincula al antejuiciado con una acción de amparo presentada para la devolución fiscal, sin embargo no se presentó evidencia que él de manera personal o por tercera persona haya requerido los servicios del abogado que presentó dicha acción, adicionalmente se tiene Certificación de la Superintendencia de Administración Tributaria -SAT- donde en el año dos mil catorce se presentaron ochenta y dos (82) acciones de amparo y en el año dos mil quince se presentaron doscientas noventa y ocho (298) acciones de Amparo, todas constantes y recurrentes que provienen de distintas entidades relacionadas a la devolución de crédito fiscal, por lo que, el amparo que se describe en las presentes diligencias, no es un caso aislado; b) informe suscrito por el Representante Legal de la entidad Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima, donde informa que por concepto de Agilización de crédito fiscal no se efectuó ninguna clase de pagos al señor Felipe Alejos Lorenzana (...) y d) Informe rendido por los Honorables

CORTE SUPREMA
DE JUSTICIA
GUATEMALA, C.A.

PARA USO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Magistrados de la Sala Tercera de lo Contencioso Administrativo, a través del cual exponen que no ha recibido ningún tipo de influencias e injerencia por parte del antejuiciado en la tramitación de los expedientes referentes a la devolución de crédito fiscal. Como podrán apreciar los (...) como derivación de lo expuesto, se torna imprósperable un juicio penal, por lo que atendiendo al principio de objetividad, se concluye que el antejuiciado señor Felipe Alejos Lorenzana no recibió ni entregó ningún pago, tampoco influenció por sí o por interpósita persona a ningún funcionario público para obtener la agilización de crédito fiscal a favor de las entidades Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima y Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima, pues ambas entidades lo desvinculan de dichas acciones, en similares términos se expresaron los Magistrados de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de lo Contencioso Administrativo al negar alguna influencia, lo expuesto, en lugar de fortalecer las evidencias que describe el ente investigador, las desvanece..." (sic).

De lo anteriormente relacionado, esta Corte al analizar los antecedentes, medios de convicción aportados, normas legales antes relacionadas y en concordancia con lo concluido por el juez pesquisador, quien actuó con base en el artículo 10 de la Ley en Materia de Antejuicio y solicitó la ratificación de la denuncia, practicó las diligencias que estimó pertinentes para el esclarecimiento del hecho, analizó los documentos con los cuales el ente investigador sustentó la petición presentada y escuchó al funcionario denunciado, por lo que estableció que no existen razones suficientes que fundamenten la procedencia del antejuicio y la declaratoria de que ha lugar a la formación de causa. Esta Corte estima que los hechos denunciados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, carecen de sustento, ya que



**ANTEJUICIO
71-2018**

34

P

Página 23

únicamente basó su denuncia en suposiciones y documentos que no son concluyentes en cuanto a la posible participación del diputado antejuiciado en los hechos que se le atribuyen; por lo tanto ante la falta de elementos de razonabilidad aportados y los pesquisados por el juez es procedente declarar que no ha lugar a la formación de causa, porque no existen indicios suficientes que pudieran sustentar la posibilidad de que el diputado del Congreso de la República de Guatemala, Felipe Alejos Lorenzana, hubiere incurrido en hechos que revistan las características de ilícitos, por lo que se comparte el criterio externado por el juez pesquisador en cuanto a declarar que no ha lugar a la formación de causa en contra del funcionario antejuiciado.

NORMAS LEGALES QUE SUSTENTAN ESTE FALLO

Artículos citados y 206 de la Constitución Política de la República de Guatemala; 77 de la Ley del Organismo Judicial; 1, 2, 4, 10, 12, 14 literal a) y 19 de la Ley en Materia de Antejuicio.

POR TANTO

LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, con base en lo considerado y en las leyes citadas, al resolver por mayoría **DECLARA: I) NO HA LUGAR A LA FORMACIÓN DE CAUSA** en contra de **FELIPE ALEJOS LORENZANA**, diputado del Congreso de la República de Guatemala. II) Notifíquese y archívese el presente expediente


Msc. Nester Mauricio Vásquez Pimentel
Presidente del Organismo Judicial
y de la Corte Suprema de Justicia


Benicia Contreras Calderón
MAGISTRADA PRESIDENTE

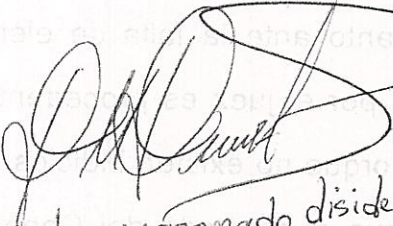
SALA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO
PENAL, EN MATERIA DE ANTEJUICIO

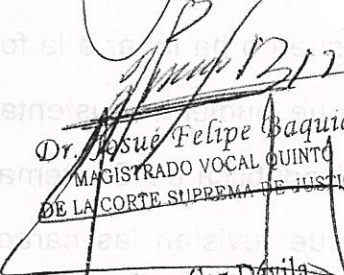
PARA USUO DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

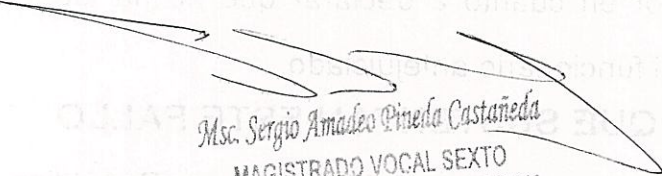


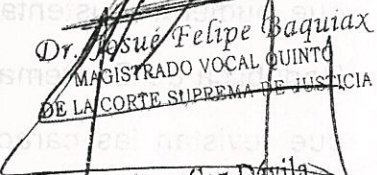

Dr. Nery Osvaldo Medina Méndez
MAGISTRADO VOCAL SEGUNDO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

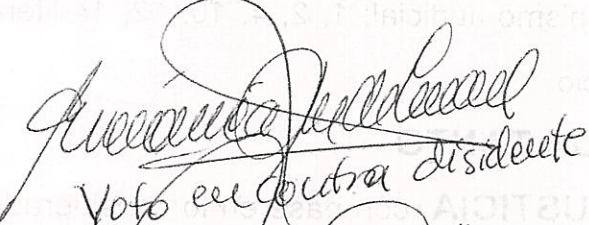

Msc. Vitalina Melina y Orellana
MAGISTRADA VOCAL TERCERA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Voto razonado disidente
M.A. Delia Marina Ovila Salazar
MAGISTRADA VOCAL CUARTA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

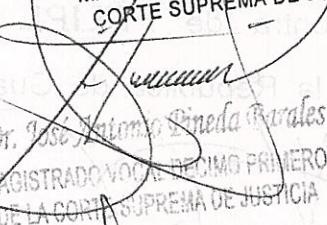

Dr. Josué Felipe Baquix
MAGISTRADO VOCAL QUINTO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



Msc. Sergio Amadeo Pineda Castañeda
MAGISTRADO VOCAL SEXTO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

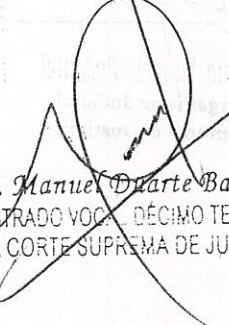

Jaime Amílcar González Dávila
Presidente
Sala Tercera de la Corte de Apelaciones del Ramo Penal,
Narcoactividad y Delitos Contra el Ambiente


Voto en contra disidente
Dra. Silvia Verónica García Molin
MAGISTRADA VOCAL OCTAVO
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Dr. Ramulfo Rafael Rojas Cetina
MAGISTRADO VOCAL DECIMO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Dr. José Antonio Pineda Morales
MAGISTRADO VOCAL DECIMO PRIMERO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


Voto Disidente razonado
Dra. María Eugenia Morales Aceña
MAGISTRADA VOCAL DECIMO SEGUNDA
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


M.A. Manuel Duarte Barrera
MAGISTRADO VOCAL DECIMO TERCERO
DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA


M.A. Dora Liberty Flores
SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

1310
000026135 *[Signature]***ANTEJUICIO 71-2018**

Voto razonado disidente de la Magistrada Delia Marina Dávila Salazar, Magistrada Vocal Cuarta de la Corte Suprema de Justicia, en la resolución de fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve, dictada por la Corte Suprema de Justicia, en cumplimiento a lo ordenado por la Corte de Constitucionalidad en auto de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, notificado a esta corte el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, emitido en los expedientes de amparos acumulados números 6224 y 6289-2018.

La suscrita no comparte el criterio de los miembros de la Corte Suprema de Justicia, que por mayoría, diez de sus integrantes emitieron dicha resolución, razón por la cual, de conformidad con los artículos 83 y 84 de la Ley del Organismo Judicial, expongo y fundamento mi voto en contra de dicha resolución, con base a las siguientes consideraciones:

Considero importante hacer referencia que el procedimiento de antejuicio es una garantía que preserva las funciones de la administración estatal, impidiendo que los funcionarios sean imputados por razones ilegítimas, políticas o espurias, siendo consideración de la suscrita que en el caso en específico la solicitud de antejuicio promovida por el Ministerio Público y la entidad querellante contra Felipe Alejos Lorenzana, diputado al Congreso de la República de Guatemala, **no es espuria**, en virtud que los hechos pueden ser constitutivos de delitos, iniciaron según el Ministerio Público, durante los operativos que tuvieron lugar el quince de abril de dos mil quince, dentro del caso "La Línea", encontrándose entre la multiplicidad de documentos incautados en los diversos allanamientos, información relacionada con expedientes de devolución de Crédito Fiscal, correspondientes a diversas empresas, desde entonces calificados como "clientes" de la organización, entre estas Zeta Gas



de Centroamérica, Sociedad Anónima y Compañía Agrícola Industrial Palo Gordo, Sociedad Anónima, al igual que la vinculación de personas como el propio Giovanni Marroquín Navas. Asimismo, considero que **la solicitud planteada es legal y legítima**, toda vez que el actuar del Ministerio Público se encuentra enmarcado dentro de lo regulado en el Decreto Número 40-94 del Congreso de la República Ley Orgánica del Ministerio Público, el cual establece que *"El Ministerio Público es una institución con funciones autónomas, promueve la persecución penal y dirige la investigación de los delitos de acción pública;..."* por lo que el Ministerio Público tiene capacidad y legitimación para promover antejuicio contra el diputado Felipe Alejos Lorenzana, en virtud de ser la institución encargada de la persecución penal, con funciones investigativas de delitos y **no políticas**. Razón por la que es imperativo que sea declarado con lugar el antejuicio, con el fin de viabilizar una investigación que permita identificar la comisión de supuestos hechos delictivos y el ejercicio del derecho de defensa dentro del debido proceso, dado que las evidencias que se aportan a la investigación previa, constituyen indicios suficientes para considerar que el antejuiciado pudo incurrir en los hechos detallados en la solicitud.

En los hechos que contiene la solicitud de antejuicio se indica que el antejuiciado se valió de su amistad con el señor Giovanni Marroquin Navas y de la que este tenía con servidores de la Superintendencia de Administración Tributaria, con el propósito de obtener para sí y para terceros beneficios indebidos, y porque aceptó una tarifa de éxito sobre su gestión. Así también, el diputado Felipe Alejos Lorenzana pudo haber incurrido en tales hechos, en virtud que indirectamente, por medio del señor Giovanni Marroquin, quien ya se encuentra ligado a proceso por estos mismos hechos, ofreció beneficios económicos a servidores públicos de la





T311

0000263

36

administración tributaria, a título de regalo o pago por obtener un trámite expedito o preferencial en las solicitudes de crédito fiscal de las entidades Zeta Gas de Centroamérica, Sociedad Anónima y Compañía Agrícola Industrial Palo Gordo, Sociedad Anónima.

Dentro del expediente constan medios de investigación como escuchas telefónicas y mensajes telefónicos a través de los cuales, según el ente investigador, coordinaban la entrega de documentos de las empresas relacionadas para que un abogado interpusiera recursos de amparo, con el fin de que el trámite pareciera lícito, así también, coordinaban el cobro de las comisiones que se harían a las empresas, al momento de que resultara favorable para la empresa la devolución del crédito fiscal, también acompañan declaraciones testimoniales, entre ellas la declaración del personero de la entidad Compañía Agrícola Industrial Ingenio Palo Gordo, Sociedad Anónima, Rodrigo Presa, quien indicó al Ministerio Público la manera en que fue contactado por el diputado Felipe Alejos Lorenzana para ofrecerle agilizar el trámite del pago de devolución del crédito fiscal, así también, información bancaria, agendas y documentos encontrados en allanamientos, dispositivos celulares con información vinculante a los hechos, de igual manera obran dentro del expediente, los informes de análisis criminal y financiero presentados por los denunciados, donde se explica la manera en que operaron, dando cuenta de sus miembros y los roles desempeñados por cada uno.

La Corte Suprema de Justicia en la resolución que mediante este voto razono en contra, indica dentro de sus razonamientos "que los hechos denunciados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, carecen de sustento, ya que basó su denuncia en suposiciones y documentos que no son concluyentes en cuanto a la posible participación del diputado antejuiciado





en los hechos que se le atribuyen, por lo tanto la deficiente investigación del ente encargado de la persecución penal y la falta de elementos de razonabilidad aportados, es procedente declarar que no ha lugar a formación de causa". En el presente caso sí existen elementos de razonabilidad suficientes y una investigación previa y seria sobre la presunta participación del antejuiciado en los hechos que pueden revestir característica de delitos que hacen viable declarar con lugar el antejuicio, no se trata de una investigación deficiente, no se puede dar ese calificativo en esta fase, pues justamente el declarar con lugar el antejuicio permite al Ministerio Público realizar la investigación dentro del debido proceso sin que esto constituya violación al principio constitucional de inocencia, sino la oportunidad de ejercer el derecho de defensa y todas las garantías dentro del debido proceso que toda persona debe gozar, ya que el antejuicio constituye un obstáculo a la persecución penal que no permite realizar una investigación completa para establecer la verdad y la presunta participación en los hechos objeto de la denuncia. En virtud de lo anterior, es criterio de la suscrita que existen motivos de razonabilidad basados en una investigación previa y seria, que constituyen indicios suficientes para concluir que los hechos **no son espurios**, que la denuncia **no es ilegítima** y que **no se promueve por razones políticas**, en congruencia con la jurisprudencia de la Corte de Constitucionalidad expediente 2152-2013, que para la viabilidad de todo antejuicio, la denuncia o querella debe basarse en una investigación previa y seria, en la cual se aporten elementos de razonabilidad suficientes que hagan viable la pesquisa, con el objeto de dilucidar los señalamientos emitidos en contra del funcionario enjuiciado. Este criterio se robustece por la Corte de Constitucionalidad expresando *"pues en el antejuicio no es necesario que se acrediten de una vez aquellos elementos constitutivos del dolo,*



1312
0000265

37

conciencia y voluntad, basta con que existan los elementos necesarios para someter a causa criminal a quien goza del antejuicio y si así fuere, ya será en el procedimiento respectivo en el que se hará pronunciamiento sobre aquellos extremos"...Expediente 44-2009, 20 de septiembre de 2010.

Al respecto del informe del pesquisidor; conforme a la ley no es vinculante y considero que no se realizó con objetividad conforme a las actuaciones del expediente y a los elementos de su propia pesquisa.

En virtud de lo anterior, es criterio de la suscrita que la Corte Suprema de Justicia, al resolver el antejuicio planteado por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, en contra del diputado Felipe Alejos Lorenzana, debió declararlo CON LUGAR A LA FORMACION DE CAUSA, por las razones anteriormente expuestas. Solicitando que el presente voto razonado sea notificado junto con la resolución.

M.A. Delia Marina Dávila Salazar
MAGISTRADA VOCAL IV
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA



20



38 *pro*



Dra. María Eugenia Morales Aceña
Magistrada Vocal Décima Segunda
Corte Suprema de Justicia



VOTO RAZONADO DISIDENTE DE LA DOCTORA SILVIA VERÓNICA GARCÍA MOLINA, MAGISTRADA VOCAL OCTAVA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN LA RESOLUCIÓN, DICTADA DENTRO DEL ANTEJUICIO NÚMERO 71- 2018, DE FECHA 20 DE MAYO DE 2019.

En cumplimiento a lo resuelto por la Corte de Constitucionalidad, en resolución emitida el dieciséis de mayo del presente año, dentro de los expedientes acumulados 6224-2018 y 6289-2018, notificada a la Corte Suprema de Justicia el diecisiete del presente mes y año, realizo un nuevo estudio del caso, por lo que en

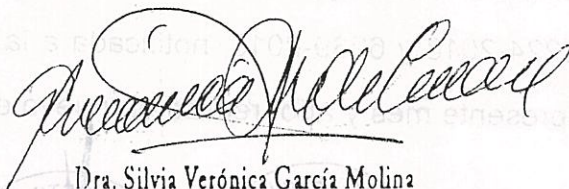


congruencia con los razonamientos expuestos por el tribunal constitucional, procedo a razonar mi voto en los términos siguientes:

1. Sin entrar a conocer el fondo del asunto, sino que únicamente viabilizando el procedimiento de antejuicio, de acuerdo a las consideraciones y parte declarativa de la resolución que hoy se acata, se nos ordena resolver nuevamente y con fundamentos; indicando únicamente si existen o no hechos tipificados como delitos, y no como se fundamentó en la resolución del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, por la que se declaró no ha lugar a formación de causa contra Felipe Alejos Lorenzana, en calidad de Diputado al Congreso de la República de Guatemala, derivado de las diligencias de antejuicio promovidas en su contra por el Ministerio Público y Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala.

2. De las distintas acciones realizadas en la pesquisa, de los documentos obrantes en los antecedentes, las declaraciones de testigos y declaraciones de los involucrados, se establece que existen hechos que pueden ser tipificados como delitos, razones suficientes para ser investigadas por un juez del orden común, para que sea este el que determine si existe o no la posible comisión de algún ilícito, por lo que es necesario que mediante un debido proceso respetando el principio de inocencia y derecho de defensa, se investiguen las circunstancias y hechos acontecidos, conforme los elementos que obran en el expediente, para establecer si existió participación del señor diputado en los hechos que se le imputan. Por tales consideraciones, emito el presente voto en contra disidente, ya que estimo que debió dársele el trámite de ha formación de causa. CONSTE.

Guatemala, veinte de mayo de dos mil diecinueve.



Dra. Silvia Verónica García Molina
Magistrada Vocal Octavo
Corte Suprema de Justicia





VOTO RAZONADO DISIDENTE DE LA ABOGADA MARÍA EUGENIA MORALES ACEÑA, MAGISTRADA VOCAL XII DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN DE FECHA VEINTE DE MAYO DE DOS MIL DIECIENUEVE, DICTADA POR LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, DENTRO DEL ANTEJUICIO NÚMERO SETENTA Y UNO GUION DOS MIL DIECIOCHO (71-2018).

La suscrita magistrada Vocal XII, no comparte el sentido y argumentaciones de los Magistrados y Magistradas integrantes de la Corte Suprema de Justicia, en virtud de lo ordenado por la honorable Corte de Constitucionalidad dentro de la acción constitucional de amparo acumuladas número 6224-2018 y 6289-2018, al haber resuelto: "NO HA LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA, en contra de FELIPE ALEJOS LORENZANA, diputado del Congreso de la República de Guatemala...", en el expediente de antejuicio arriba identificado.

La Honorable Corte de Constitucionalidad indicó categóricamente en la página 7 de la resolución dictada dentro de la acción constitucional acumulada ya identificada, que: "... se advierte que la autoridad denunciada se extralimitó en el ejercicio de sus facultades, lo cual conlleva vulneración al principio jurídico del debido proceso, debido a que no se limitó a declarar la existencia o no de hechos que puedan ser tipificados como delito, conforme a la preceptuado en la ley rectora del acto, sino emitió juicios de valor con relación a los elementos de convicción aportados, lo cual constituye función propia de los tribunales competentes, que efectuarán en su momento procesal oportuno."

En base a lo anterior y conteste con lo argumentado en su momento oportuno en mi voto razonado efectuado en la resolución de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, del antejuicio de mérito, me permito indicar que el antejuicio es un instrumento habilitante de los procesos penales. La presunción de fidelidad de



los funcionarios públicos a la Constitución no descarta la posibilidad de autenticidad de las acusaciones que contra ellos se realicen, esto sin vulnerar el derecho fundamental de presunción de inocencia que ostentamos todos y todas las personas en la República, entendiendo que el antejuicio no busca atribuir responsabilidades, sino que se establece como una acción de carácter administrativo, además, que no se pronuncia con autoridad de cosa juzgada sobre una violación a la ley, sino solamente sobre el hecho de existir indicios suficientes para que un órgano jurisdiccional pueda conocer sobre la posible responsabilidad o no, de una persona investida de esta inmunidad personal.

Con base a lo anterior, en el considerando IV de la resolución de mérito, específicamente en la página 21, la Corte Suprema de Justicia, estimó necesario hacer referencia a las conclusiones emitidas por el juez pesquisidor, siendo estas las únicas en que "fundamenta debidamente" su nueva resolución; sin embargo omite pronunciarse sobre los indicios documentales, encontrados durante el allanamiento efectuado en la captura del señor Giovanni Marroquín, en el cual se le incautaron, dispositivos electrónicos que contenían comunicaciones de audio y texto entre éste y el antejuiciado, lo cual podría ser un hecho relevante; tampoco fueron tomados en consideración los cuadros de clientes, gestiones y comisiones de Giovanni Marroquín Navas, por un trámite preferencial dentro de la Superintendencia de Administración Tributaria, los cuales constan en autos; siendo estos elementos de convicción que podría sustentar una posible participación del antejuiciado.

Ahora bien, en cuanto a la declaración de testigos, la Corte Suprema de Justicia en su resolución las transcribe del informe del juez pesquisidor y considera en forma descontextualizadas, al indicar que: "a) Rodrigo Presa Riera, quien en su deposición



1315

0000259

40 Bel

expresó que no se pagó nada al señor Felipe Alejos y él tampoco cobró, por lo que la negociación nunca se dio..."; obviando que consta en autos la declaración testimonial del señor Presa Riera, la cual en su parte conducente indica que: "...en ese momento Felipe Alejos me comenta que él nos puede ayudar con el tema de la agilización de la devolución del crédito fiscal, yo me intereso en el tema porque Ingenio Palo Gordo, S.A. tiene derecho de reclamar devolución de crédito fiscal, por lo que yo le pregunto cómo funciona, él me comenta que es por medio de la interposición de un amparo y que él conoce la gente para ayudamos con el tema, en ese momento yo asumo que Felipe Alejos tiene a la gente, me refiero a abogados y contactos en la SAT para agilizar la devolución de crédito fiscal por ser él un diputado al congreso de la república, en ese momento me dice también que hay una tarifa de éxito en base a resultados pero que lo discutiríamos más adelante...", (el resaltado y subrayado es propio). Transcripción que se encuentra íntegramente contenida en los folios del 27 al 29 de la pieza I.

En cuanto a la declaración de David Carlos EkmanKhan, también se obvió lo siguiente: "...Unos días después recuerdo que Rodrigo me informa que Felipe Alejos mandó a recoger la documentación relacionada con los expedientes y mi acta notarial de nombramiento a la sede del Ingenio Polo Gordo y que después, Felipe Alejos le había enviado copia del amparo que el Abogado había colocado a ruego mío, quiero dejar claro que este amparo, si bien es cierto lo presenten a ruego mío, el mismo lo presentaron por instrucción de Felipe Alejos como parte de la gestión que había sido ofrecida. Efectivamente unos días después la Superintendencia de Administración Tributaria nombra Auditores para hacer la revisión correspondiente en relación a las solicitudes de devolución de crédito fiscal, por lo que, ante tal situación, entendí que el proceso estaba en



31



camino y que la gestión ofrecida por Felipe Alejas estaba avanzando...",

(resaltado y subrayado es propio) dicha transcripción obra a folios 30 a 31 pieza I del expediente de mérito.

Y por último, se hace indispensable indicar que tampoco en esta nueva resolución se tomó como hallazgo inevitable, el informe sobre la Extracción Forense de Información CASO M tres mil quinientos cuarenta y dos diagonal dos mil quinientos diagonal tres", firmado por Richard Arévalo, investigador analista de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, obrante en la pieza número I del folio 32 al 55 del expediente de mérito y su respectiva ampliación de fecha veintidós de enero de dos mil dieciocho.

De lo anterior deviene concluir que existen ensobre abundancia razones suficientes que fundamentan la procedencia del antejuicio, y su declaratoria de haber lugar a formación de causa del diputado antejuicio, basada en elementos de convicción documental (físico, electrónicos, etc), audios y de índole testimonial.

Considerando que la figura del antejuicio doctrinariamente es una prerrogativa, es decir un permiso, un beneficio o una dispensa que se otorga a una persona respecto a un determinado asunto, por lo cual no debe ser motivo de impunidad. Y recordando que esta Corte Suprema de Justicia ha sustentado que el contenido del informe del juez pesquisador no puede ser vinculante para la decisión tomada en esta fase administrativa, me aparto de lo resuelto, por la debilidad de este. Por las consideraciones realizadas anteriormente, respetando, pero no compartiendo el criterio de la mayoría, dejo constancia expresa de mi disenso, ya que por los argumentos esgrimidos se establece que se debió resolver haber lugar la formación de causa en contra del Felipe Alejos Lorenzana. Solicitando que este voto disidente sea notificado juntamente con la resolución.


Dra. María Eugenia Morales Acuña
Magistrada Vocal Décima Segunda
Corte Suprema de Justicia



41 *[Handwritten signature]*

El Infrascrito Secretario General de la Corte de Constitucionalidad

CERTIFICA:

Que la fotocopia que antecede, compuesta de treinta y un hojas, es auténtica por ser fiel y exacta reproducción de las resoluciones de veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho y veinte de mayo de dos mil diecinueve emitida por la Corte Suprema de Justicia, y los Votos Razonados Disidentes de las Magistradas María Eugenia Morales Aceña, Magistrada Vocal XII (en ambas resoluciones), Delia Marina Dávila Salazar, Magistrada IV, y Silvia Verónica García Molina, Magistrada Vocal VIII, dentro de las diligencias de antejuicio setenta y uno-dos mil dieciocho (71-2018).

Y, para entregar a la **Abogada Benicia Contreras Calderón, Magistrada Presidenta de la Sala de la Corte de Apelaciones del ramo Penal, en materia Tributaria y Aduanera**, extendiendo, sello y firmo en treinta y dos hojas incluyendo la presente. Guatemala nueve de septiembre de dos mil diecinueve.

[Handwritten signature]
MARTÍN RAMÓN GUZMÁN HERNÁNDEZ

SECRETARIO GENERAL



SALA DE LA CORTE DE APELACIONES DEL RAMO PENAL
EN MATERIA TRIBUTARIA Y ADUANERA DEL MUNICIPIO Y
DEPARTAMENTO DE GUATEMALA - ORGANISMO JUDICIAL -



Hoy a las: 12 Hrs.: 36 mts.
Por: *[Handwritten signature]*

42 Am

PRUEBA

No. 2

43 

COPIA

EXPEDIENTE NÚMERO 6224-2018. Oficial 7º de Secretaría General.

ASUNTO: AMPARO EN ÚNICA INSTANCIA

SOLICITANTE: MINISTERIO PÚBLICO A TRAVÉS DE FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD - FECI.

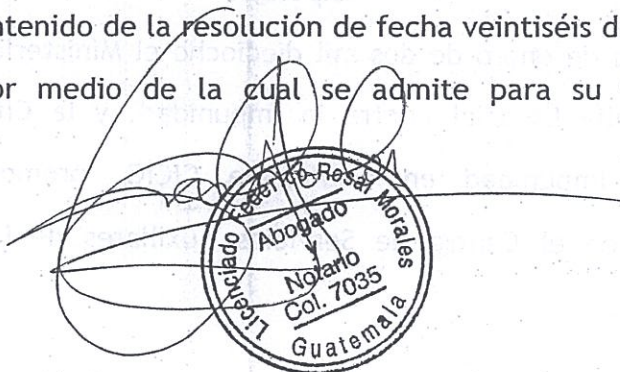
AUTORIDAD DENUNCIADA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

HONORABLE CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD EN CALIDAD DE TRIBUNAL EXTRAORDINARIO DE AMPARO.

NESTER MAURICIO VÁSQUEZ PIMENTEL, de cincuenta y seis años de edad, casado, Abogado y Notario, guatemalteco, de este domicilio; comparezco respetuosamente ante este Honorable Tribunal de Amparo, para el efecto indico la,

RAZÓN DE MI GESTIÓN:

1. **DE LA CALIDAD BAJO LA CUAL ACTÚO:** Comparezco en calidad de Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, lo cual acredito con el documento que acompaño.
2. **DE LA DIRECCIÓN, PROCURACIÓN Y AUXILIO:** Actúo bajo el auxilio, Dirección y procuración del Abogado Federico Guillermo Rosal Morales, Colegiado activo siete mil treinta y cinco (7,035).
3. **DEL LUGAR SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:** Señalo como lugar para recibir notificaciones la Oficina de ASESORÍA JURÍDICA del Organismo Judicial, ubicada en la veintiuna (21) calle siete guion setenta (7-70) de la zona uno (1) de esta Ciudad, Planta Baja del Edificio de la Corte Suprema de Justicia.
4. **DEL MOTIVO DE MI COMPARECENCIA:** El veintisiete de diciembre de dos mil dieciocho a las quince horas con cinco minutos la Corte Suprema de Justicia fue notificada del contenido de la resolución de fecha veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho por medio de la cual se admite para su trámite la Acción



COPIA

EXPEDIENTE NÚMERO 6234-2018. Oficial 7º de Secretaría General.

ASUNTO: AMPARO EN ÚNICA INSTANCIA

Constitucional de Amparo solicitada por Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, la cual en lo conducente, textualmente dice: *"VI) Para resolver si procede o no el amparo provisional, que la autoridad denunciada remita el antecedente correspondiente o informe circunstanciado, o ambos, dentro del perentorio término de cuarenta y ocho horas, con la salvedad de que, si no tuviere en su poder lo mencionado, informe a esta Corte al respecto (...)"*(SIC).

En virtud de lo cual, se remite lo siguiente:

DOCUMENTOS:

- a) De manera atenta se remiten a la Corte de Constitucionalidad, el **expediente original de Antejuicio número setenta y uno guion dos mil dieciocho (71-2018)**, que consta de siete (7) piezas en mil doscientos ochenta y siete (1287) folios. (Todos documentos originales).
- b) Discos compactos originales que obran a folios ciento noventa y uno (191), seiscientos sesenta y dos (662), seiscientos noventa y siete (697), setecientos treinta y cuatro (734), setecientos treinta y nueve (739), y mil ciento noventa y seis (1196).
- c) Documentos que consisten en: Gráficas de tamaño doble oficio que obran a folios seiscientos sesenta y tres (883) y seiscientos noventa y ocho (698). (Documentos en original).

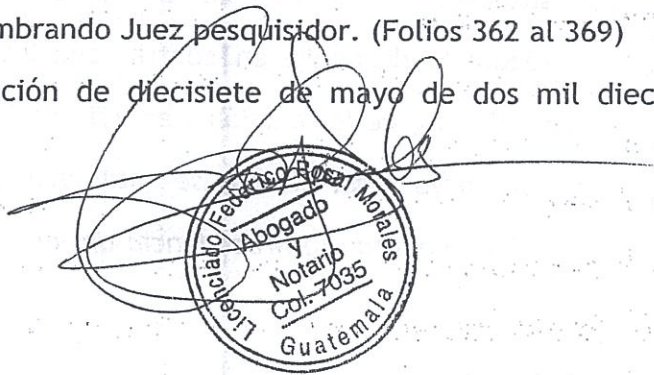
Respetuosamente, se rinde el siguiente informe, por cuanto,

Expongo:

1. El veintiséis de enero de dos mil dieciocho el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, promovieron solicitud de Antejuicio en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de

Justicia Penal, contra el diputado al Congreso de la República de Guatemala, FELIPE ALEJOS LORENZANA; con las pruebas y documentación que consideran medios de prueba y los informes de extracción forense de información, documentos de investigación y litigio.

2. Por resolución de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho el Señor Juez Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, dentro del expediente identificado cero mil ochenta y uno guion dos mil dieciocho guion cero cero treinta y nueve, SE INHIBIÓ de conocer la solicitud de ANTEJUICIO. (Folios 82 y 83)
3. Mediante oficio sin número de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho el Señor Juez Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, remitió a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia el expediente de Antejudio promovido. (Folio 147)
4. Mediante resoluciones de fecha (todas) de dieciocho de abril de dos mil dieciocho la Honorable Corte Suprema de Justicia llamó a Magistrados de Salas de la Corte de Apelaciones para integrar Corte con el objeto de conocer que dentro de las diligencias de Antejudio promovidas, el señor FELIPE ALEJOS LORENZANA promovió RECUSACIÓN contra todos los Magistrados de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; y se resolvió: se rechaza la recusación planteada contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. (Folios 277 al 283)
5. Por resolución de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA admite para su trámite las diligencias de ANTEJUICIO promovidas. Nombrando Juez pesquisidor. (Folios 362 al 369)
6. Mediante resolución de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho el JUEZ



PESQUISIDOR del expediente de ANTEJUICIO ordena continuar con el trámite del mismo, y practicar las diligencias que corresponden. (Folios 389 y 390)

7. Dentro del trámite de las diligencias de Antejuicio promovidas las partes procesales presentaron solicitudes conforme a sus pretensiones. El JUEZ PESQUISIDOR estuvo atento y resolvió las mismas en cuanto eran conducentes.

8. El JUEZ PESQUISIDOR nombrado rindió INFORME CIRCUNSTANCIADO a la Honorable CORTE SUPREMA DE JUSTICIA mediante Oficio sin número de fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho. (Folios 1238 al 1250)

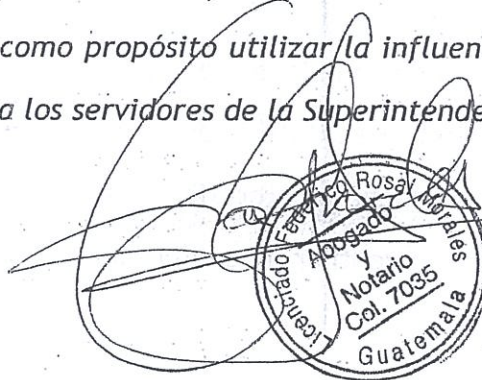
9. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA resolvió en definitiva las diligencias de ANTEJUICIO solicitadas contra el señor FELIPE ALEJOS LORENZANA en su calidad de diputado al Congreso de la República de Guatemala; haciéndose constar los motivos y argumentos de la denunciante como lo relacionado al informe circunstanciado del Juez Pesquisidor. También hace relación a la inhibitoria y las declaraciones testimoniales contenidas en las pesquisas, los documentos que obran en el expediente como las investigaciones preliminares del agente fiscal; la fundamentación que corresponde de conformidad con la naturaleza jurídica y forma de la resolución impugnada por acción constitucional de amparo; considerando que no existen documentos ni motivos suficientes que evidencien la situación jurídica denunciada, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA con un Voto razonado disidente en contra, concluyó: *"Del análisis de lo anteriormente indicado, de la relación y estudio de las actuaciones obrantes en autos, la normativa legal citada, se establece que no existen razones suficientes que fundamentan la procedencia del antejuicio y la declaratoria*

45 

de ha lugar a formación de causa. En virtud de que los hechos denunciados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, carecen de viabilidad, en consecuencia no ha lugar a formación de causa en contra del diputado antejuiciado (...) NO HA LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA en contra de FELIPE ALEJOS LORENZANA, diputado del Congreso de la República de Guatemala (...)." (SIC)

10. No se encontraron notificaciones ni solicitudes pendientes de resolver.

En la argumentación, el amparista en la calidad con que actúa, hace la relación siguiente, en forma textual: "...que el pleno de la Corte Suprema de Justicia dio trámite por considerar que NO se trataba de de un señalamiento espurio, político o ilegítimo, designando para el efecto como Juez Pesquisidor (...) quien realizó las pesquisas que consideró pertinentes en apariencia basándose en los hechos que el Ministerio Público presentó (...)" ; el amparista continúa afirmando en su argumentación, "...probablemente FELIPE ALEJOS LORENZANA, estos últimos cuatro, realizaban el ofrecimiento a diversos empresarios exportadores de un portafolio de servicios que consistía en la gestión de ilícitos ante la Superintendencia de Administración Tributaria para agilizar sus solicitudes de devolución de crédito fiscal (...)" ; además, añade: "...de igual modo FELIPE ALEJOS LORENZANA pudo haber actuado como intermediario, a través de GEOVANI MARROQUÍN NAVAS, quien prevalido del vínculo que éste ultimo tenía con servidores de la Superintendencia de Administración Tributaria, como (...)" . Más adelante se añade: "...de igual forma Alejos Lorenzana pudo en forma directa haber solicitado y aceptado un beneficio económico al que se le denominaba tarifa de éxito, teniendo como propósito utilizar la influencia real de GEOVANI MARROQUIN NAVAS respecto a los servidores de la Superintendencia (...)" .



Hago constar que en el memorial de interposición de Recurso Constitucional de AMPARO la amparista propone como una suposición el hecho que el denunciado FELIPE ALEJOS LORENZANA tiene una relación criminal con los demás mencionados, quienes padecen proceso penal.

En el transcurso de la investigación y diligencias del JUEZ PESQUISIDOR, la entidad ahora amparista, procedió con afán y agrado en apoyo al trámite del mismo. No obstante los resultados no le son adecuados, ni convenientes con sus fines se pronuncian por la vía de la ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO para la revisión de los distintos procesos que mencionan como medios de prueba, en el apartado del memorial de amparo, denominado “PRUEBAS”; es decir, pretendiendo instituir a favor del MINISTERIO PÚBLICO, al RECURSO EXTRAORDINARIO Y CONSTITUCIONAL DE AMPARO como un proceso de revisión y proceso de conocimiento.

En forma contradictoria en su exposición textualmente argumenta (página 29) como se lee: *“Por lo antes expuesto el Ministerio Público considera que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, al emitir la resolución de fecha 21 de noviembre del año 2,018 que ha de constituir el acto reclamado, se excede en el ejercicio de sus facultades y vulneró los derechos al debido proceso así como limita el ejercicio de la acción y persecución penal, ya que la decisión asumida carece de la debida fundamentación, en la que se realice un razonamiento, lo que hace evidente la violación constitucional al derecho del Ministerio Público como sujeto procesal (...)”*. (Sic)

La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en cumplimiento con las leyes vigentes y positivas aplicó lo que de conformidad con la Ley en Materia de Antejuicio es el objeto de la misma Ley, que consiste en crear y aplicar los procedimientos para el trámite de las diligencias de antejuicio que se deben ventilar de conformidad con el ordenamiento

46 

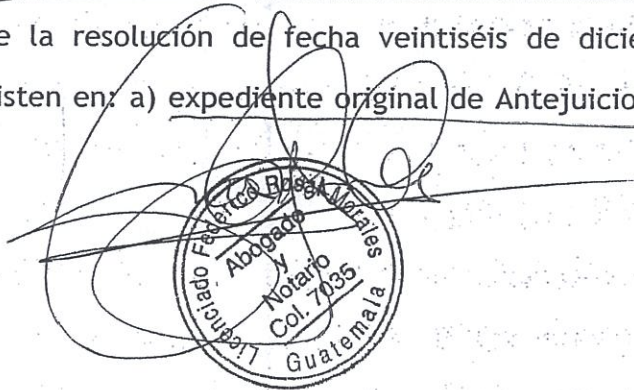
jurídico de Guatemala. El Antejjuicio es un Derecho y la garantía que la Constitución Política de la República otorga a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley en Materia de Antejjuicio.

En consecuencia, el fallo ahora impugnado por Recurso de Amparo, emitido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho dentro del Expediente de ANTEJUICIO Número setenta y uno guion dos mil dieciocho (71-2018), cumplió con la argumentación y fundamentación necesarias de conformidad con el ordenamiento jurídico de la República de Guatemala.

Honorables Magistrados de la Corte de Constitucionalidad constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, En mi calidad de PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Respetuosamente comparezco a evacuar la audiencia conferida, en tiempo dentro del plazo legal; que habiendo cumplido con el ordenamiento jurídico de la República de Guatemala en Materia de Antejjuicio en la resolución de fecha veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho dentro del Expediente de Antejjuicio número setenta y uno guion dos mil dieciocho (71-2018), el Recurso de Amparo intentado queda sin Materia ni cumple con los Presupuestos Procesales que ordena la Ley; en su oportunidad procesal se declare SIN LUGAR el amparo promovido.

MEDIOS DE PRUEBA:

Documentos que en original se remiten a la Honorable Corte de Constitucionalidad en cumplimiento de la resolución de fecha veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho, que consisten en: a) expediente original de Antejjuicio número setenta y



uno. guion dos mil dieciocho (71-2018), que consta de siete (7) piezas en mil doscientos ochenta y siete (1287) folios. (Todos documentos originales); b) Discos compactos originales que obran a folios ciento noventa y uno (191), seiscientos sesenta y dos (662), seiscientos noventa y siete (697), setecientos treinta y cuatro (734), setecientos treinta y nueve (739), y mil ciento noventa y seis (1196). c) Documentos que consisten en: Gráficas de tamaño doble oficio que obran a folios seiscientos sesenta y tres (883) y seiscientos noventa y ocho (698). (Documentos en original).

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el Artículo 8º., regula: "El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan".

Artículo 33, establece: "Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que les fueron presentados, mandando pedir los antecedentes o en su defecto informe circunstanciado a la persona, autoridad, funcionario o empleado contra el cual se haya pedido amparo, quienes deberán cumplir remitiendo los antecedentes o informando dentro del perentorio término de cuarenta y ocho horas, mas el de la distancia, que fijará el tribunal en la misma resolución, a su prudente arbitrio".

Con base en lo manifestado, respetuosamente,

SOLICITO:

47 

1. Se admita para su trámite el presente escrito y documento adjunto, y se agregue a sus antecedentes.
2. Que se tenga acreditada y se reconozca la calidad con la cual actúo de conformidad con la representación que acompaño.
3. Que se tome nota de que actúo bajo la Dirección y procuración del Abogado que me auxilia.
4. Que se tome nota del lugar que señalo para recibir notificaciones.
5. Que se tome nota que dentro del plazo legal, en la calidad con que actúo estoy evacuando la audiencia otorgada a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y se remiten los documentos requeridos en original, en cumplimiento a la resolución de esa Corte de fecha veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho. Se tengan por ofrecidos e individualizados los medios de prueba propuestos.

DE FONDO:

Que al dictarse Sentencia de Amparo se deniegue el amparo solicitado por el MINISTERIO PÚBLICO, por INEXISTENCIA DE AGRAVIOS dado que, la AUTORIDAD DENUNCIADA ACTUÓ sin violentar los derechos aducidos por el amparista Y DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ATRIBUCIONES que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley en Materia de Antejucio y la Ley del Organismo Judicial.

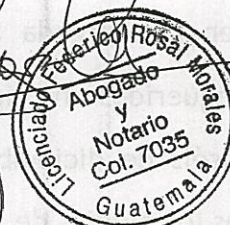
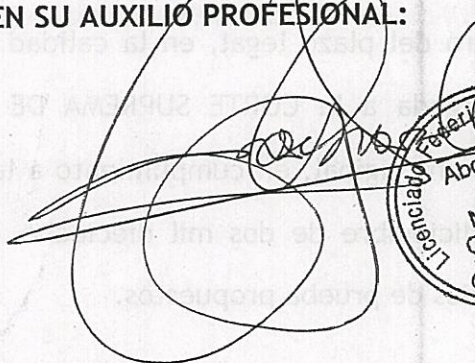
CITA DE LEYES. Artículos citados y 12, 28, 203, 204, 205, 206, 214, 265 y 268 de la Constitución Política de la República. Artículos 1, 3, 4, 7, 9, 11, 20, 33, 34, 35, 42, 43, 44 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Artículos 1,2,5,7,10,15,26,29,35,47 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Disposiciones Reglamentarias complementarias a la Ley de Amparo, Exhibición personal y de Constitucionalidad. Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 51, 52, 54 y 55,

ABOGADOS Y NOTARIOS
GUATEMALA



de la Ley del Organismo Judicial. Adjunto doce (12) copias del presente memorial y documento de personería. Guatemala, veintiocho de diciembre de dos mil dieciocho.

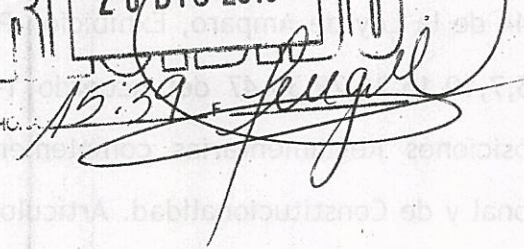
A RUEGO DEL PRESENTADO QUIEN SI SABE FIRMAR PERO DE MOMENTO NO PUEDE HACERLO; Y EN SU AUXILIO PROFESIONAL:



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
SECRETARÍA GENERAL

RECIBIDO
28 DIC 2018

15:39





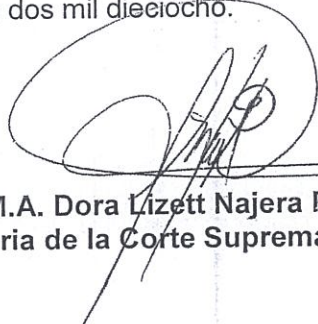
48 *PR*

LA INFRASCrita SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CERTIFICA:

Que para el efecto tiene a la vista, el acta número cincuenta y tres guion dos mil dieciocho (53-2018) de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, de la sesión celebrada por la Corte Suprema de Justicia, que copiada literalmente dice:

“Acta 53-2018. En la ciudad de Guatemala, el trece de octubre de dos mil dieciocho, a las dieciocho horas, reunidos en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Magistrado Presidente: José Antonio Pineda Barales; Magistrada Vocal Primera, Silvia Patricia Valdés Quezada; Magistrado Vocal Segundo, Nery Osvaldo Medina Méndez; Magistrada Vocal Tercera, Vitalina Orellana y Orellana; Magistrada Vocal Cuarta, Delia Marina Dávila Salazar; Magistrado Vocal Quinto, Josué Felipe Baquix Baquix; Magistrado Vocal Sexto, Sergio Amadeo Pineda Castañeda; Magistrada Vocal Octava, Silvia Verónica García Molina; Magistrado Vocal Noveno, Nester Mauricio Vásquez Pimentel; Magistrado Vocal Décimo, Ranulfo Rafael Rojas Cetina; Magistrada Vocal Décima Segunda, María Eugenia Morales Aceña; y la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Odethe Moscoso Arriaza de Salazar, y altos dignatarios de la nación, a efecto de celebrar sesión solemne de toma de posesión del Magistrado Vocal Noveno, Nester Mauricio Vásquez Pimentel; como Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, se procede de la siguiente manera: **PRIMERO:** El Señor Presidente saliente, José Antonio Pineda Barales, abre la sesión. **SEGUNDO:** La Señora Secretaria, abogada Cecilia Odethe Moscoso Arriaza de Salazar, conforme al ceremonial correspondiente, da lectura al punto **CUARTO**, del Acta número Cuarenta y siete – dos mil dieciocho, de la sesión extraordinaria de Pleno de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el que copiado literalmente dice: “...**CUARTO:** Después de la votación respectiva, el Magistrado Presidente José Antonio Pineda Barales, manifiesta que se cumple con la mayoría calificada y por lo tanto con las dos terceras partes que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, razón por la cual las Señoras y Señores Magistrados declaran electo al Magistrado Vocal Noveno, **NESTER MAURICIO VÁSQUEZ PIMENTEL**, como Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, para el periodo dos mil dieciocho - dos mil diecinueve...”. **TERCERO:** El Presidente del Congreso de la República, Diputado Álvaro Enrique Arzú Escobar, en cumplimiento del punto de acta de número y fecha referido con anterioridad, y lo preceptuado en la literal b) del artículo 165 de la Constitución Política de la República de Guatemala, da posesión efectiva del cargo de Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia al abogado **NESTER MAURICIO VÁSQUEZ PIMENTEL**. **CUARTO:** El Magistrado Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, José Antonio Pineda Barales, hace formal entrega del cargo al Magistrado Vocal Noveno, **NESTER MAURICIO VÁSQUEZ PIMENTEL** así como del medallón, botón y mallette, insignias que representan su alta investidura. **QUINTO:** Se termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio treinta minutos más tarde. Se suscribe por el Presidente, Magistradas y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, altos dignatarios del país que en ella intervinieron y la Secretaria..... (Aparecen las firmas respectivas)”. Y para remitir a la Asesoría Jurídica del Organismo Judicial, extendiendo, sello y firma la presente en la ciudad de Guatemala, el diez de diciembre de dos mil dieciocho.


M.A. Dora Lizett Najera Flores
Secretaria de la Corte Suprema de Justicia



49 

PRUEBA

No. 3



COPIA

1

50 (por)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

EXPEDIENTE NÚMERO 3488-2019. Oficial 7° de Secretaría General.

ASUNTO: AMPARO EN ÚNICA INSTANCIA

SOLICITANTE: MINISTERIO PÚBLICO A TRAVÉS DE FISCALÍA ESPECIAL CONTRA LA IMPUNIDAD - FECI-.

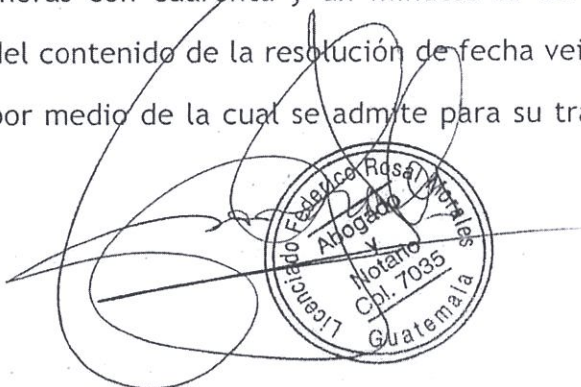
AUTORIDAD DENUNCIADA: CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

HONORABLE CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD EN CALIDAD DE TRIBUNAL EXTRAORDINARIO DE AMPARO.

NESTER MAURICIO VÁSQUEZ PIMENTEL, de cincuenta y seis años de edad, casado, Abogado y Notario, guatemalteco, de este domicilio; comparezco respetuosamente ante este Honorable Tribunal de Amparo, para el efecto indico la,

RAZÓN DE MI GESTIÓN:

1. **DE LA CALIDAD BAJO LA CUAL ACTÚO:** Comparezco en calidad de Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, lo cual acredito con el documento que acompaño.
2. **DE LA DIRECCIÓN, PROCURACIÓN Y AUXILIO:** Actúo bajo el auxilio, Dirección y procuración del Abogado Federico Guillermo Rosal Morales, Colegiado activo siete mil treinta y cinco (7,035).
3. **DEL LUGAR SEÑALADO PARA RECIBIR NOTIFICACIONES:** Señalo como lugar para recibir notificaciones la Oficina de ASESORÍA JURÍDICA del Organismo Judicial, ubicada en la veintiuna (21) calle siete guion setenta (7-70) de la zona uno (1) de esta Ciudad, Planta Baja del Edificio de la Corte Suprema de Justicia.
4. **DEL MOTIVO DE MI COMPARECENCIA:** El veinticinco de junio de dos mil diecinueve a las doce horas con cuarenta y un minutos la Corte Suprema de Justicia fue notificada del contenido de la resolución de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve por medio de la cual se admite para su trámite la Acción



Constitucional de Amparo solicitada por Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, Agente Fiscal Andrei Vladimir González Arteaga, la cual en lo conducente, textualmente dice: *"VI) Para resolver si procede o no el amparo provisional, que la autoridad denunciada remita el antecedente correspondiente al recurso correspondiente o informe circunstanciado, o ambos, dentro del perentorio término de cuarenta y ocho horas, con la salvedad de que, si no tuviere en su poder lo mencionado, informe a esta Corte al respecto (...)"*(SIC).

En virtud de lo cual, se remite lo siguiente:

DOCUMENTOS:

a) De manera atenta se remiten a la Corte de Constitucionalidad, el expediente original de Antejuicio número setenta y uno guion dos mil dieciocho (71-2018), que consta de siete (7) piezas en mil trescientos veintidós (1322) folios. (Todos documentos originales).

b) Discos compactos originales que obran a folios ciento noventa y uno (191), seiscientos sesenta y dos (662), seiscientos noventa y siete (697), setecientos treinta y cuatro (734), setecientos treinta y nueve (739), y mil ciento noventa y seis (1196).

Respetuosamente, se rinde el siguiente informe, por cuanto,

Expongo:

1. El veintiséis de enero de dos mil dieciocho el Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad, y la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala CICIG, promovieron solicitud de Antejuicio en el Centro de Servicios Auxiliares de la Administración de Justicia Penal, contra el diputado al Congreso de la República de Guatemala, FELIPE ALEJOS LORENZANA; con las pruebas y documentación que consideran

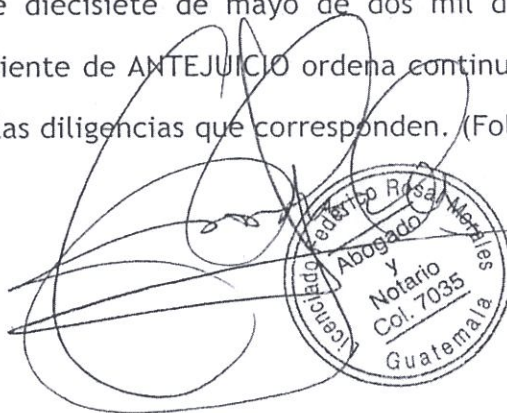


51 (30)

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

medios de prueba y los informes de extracción forense de información, documentos de investigación y litigio. (Folios 1 al 81)

2. Por resolución de fecha treinta y uno de enero de dos mil dieciocho el Señor Juez Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, dentro del expediente identificado cero mil ochenta y uno guion dos mil dieciocho guion cero cero treinta y nueve, SE INHIBIÓ de conocer la solicitud de ANTEJUICIO. (Folios 82 y 83)
3. Mediante oficio sin número de fecha catorce de marzo de dos mil dieciocho el Señor Juez Tercero de Primera Instancia Penal, Narcoactividad y Delitos contra el Ambiente, remitió a la Secretaría de la Corte Suprema de Justicia el expediente de Antejuicio promovido. (Folio 147)
4. Mediante resoluciones de fecha (todas) de dieciocho de abril de dos mil dieciocho la Honorable Corte Suprema de Justicia llamó a Magistrados de Salas de la Corte de Apelaciones para integrar Corte con el objeto de conocer que dentro de las diligencias de Antejuicio promovidas, el señor FELIPE ALEJOS LORENZANA promovió RECUSACIÓN contra todos los Magistrados de la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA; y se resolvió: se rechaza la recusación planteada contra los Magistrados de la Corte Suprema de Justicia. (Folios 277 al 283)
5. Por resolución de fecha veinticinco de abril de dos mil dieciocho la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA admite para su trámite las diligencias de ANTEJUICIO promovidas. Nombrando Juez pesquisidor. (Folios 362 al 369)
6. Mediante resolución de diecisiete de mayo de dos mil dieciocho el JUEZ PESQUISIDOR del expediente de ANTEJUICIO ordena continuar con el trámite del mismo, y practicar las diligencias que corresponden. (Folios 389 y 390)



7. Dentro del trámite de las diligencias de Antejuicio promovidas las partes procesales presentaron solicitudes conforme a sus pretensiones. El JUEZ PESQUISIDOR estuvo atento y resolvió en cuanto eran conducentes.
8. El JUEZ PESQUISIDOR nombrado rindió INFORME CIRCUNSTANCIADO a la Honorable CORTE SUPREMA DE JUSTICIA mediante Oficio sin número de fecha cinco de noviembre de dos mil dieciocho. (Folios 1238 al 1250)
9. El veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA resolvió en definitiva las diligencias de ANTEJUICIO solicitadas contra el señor FELIPE ALEJOS LORENZANA en su calidad de diputado al Congreso de la República de Guatemala; haciéndose constar los motivos y argumentos de los denunciantes como lo relacionado al informe circunstanciado del Juez Pesquisidor. También hace relación a la inhibitoria y las declaraciones testimoniales contenidas en las pesquisas, los documentos que obran en el expediente como las investigaciones preliminares del agente fiscal; la fundamentación que corresponde de conformidad con la naturaleza jurídica y forma de la resolución impugnada por acción constitucional de amparo; considerando que no existen documentos ni motivos suficientes que evidencien la situación jurídica denunciada, la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA con un Voto razonado disidente en contra, concluyó: *"Del análisis de lo anteriormente indicado, de la relación y estudio de las actuaciones obrantes en autos, la normativa legal citada, se establece que no existen razones suficientes que fundamentan la procedencia del antejuicio y la declaratoria de ha lugar a formación de causa. En virtud de que los hechos denunciados por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad de Guatemala, carecen de viabilidad, en consecuencia no ha lugar a formación*



52

304

3

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

de causa en contra del diputado antejuiciado (...) NO HA LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA en contra de FELIPE ALEJOS LORENZANA, diputado del Congreso de la República de Guatemala (...)." (SIC) (Folios 1272 al 1284)

10. Por resolución de la CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD dentro de los Expedientes de Amparo acumulados seis mil doscientos veinticuatro guión dos mil dieciocho (6224-2018) y seis mil doscientos ochenta y nueve guion dos mil dieciocho (6289-2018) de fecha dieciséis de mayo de dos mil diecinueve, se resolvió lo siguiente: Otorgó amparo provisional dejando en suspenso definitivo la resolución señalada como acto reclamado. Otorgando para efectos positivos de la protección constitucional, el plazo de cinco días a partir de la notificación, para que la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA emitan nueva resolución en la que se pronuncie sobre las diligencias de antejuicio relacionadas fundamentando debidamente su decisión. Cédula de notificación de fecha diecisiete de mayo de dos mil diecinueve. (Folios 1289 al 1295)

11. Con fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve dictada por el Pleno de los Señores Magistrados de la HONORABLE CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, con dos votos razonados disidentes, dentro de las diligencias de Antejuicio solicitadas por el Ministerio Público y la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala CICIG, contra el señor FELIPE ALEJOS LORENZANA en su calidad de, Diputado al Congreso de la República, se resolvió: "1) NO HA LUGAR A FORMACIÓN DE CAUSA en contra de FELIPE ALEJOS LORENZANA, diputado al Congreso de la República de Guatemala (...)" (Sic) (Folios 1298 al 1315)

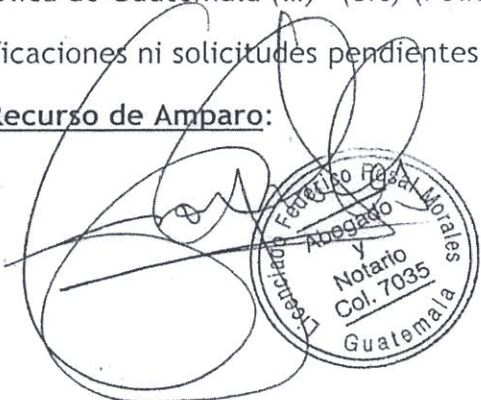
12. No se encontraron notificaciones ni solicitudes pendientes de resolver.

De las Argumentaciones del Recurso de Amparo:

ABOGADOS Y NOTARIOS
GUATEMALA



GUATEMALA



En la argumentación, el amparista en la calidad con que actúa, hace la relación siguiente, en forma textual: "...Juzgado que en cumplimiento al proceso legal establecido se inhibe de conocer y lo trasladó a la Corte Suprema de Justicia en donde se identificó como ANTEJUICIO 71-2018 solicitud a la que el pleno de la Corte Suprema de Justicia dio trámite por considerar que NO se trataba de de un señalamiento espurio, político o ilegítimo, designando para el efecto como Juez Pesquisidor al Abogado (...) quien realizó las pesquisas que consideró pertinentes en apariencia basándose en los hechos que el Ministerio Público presentó en su solicitud (...).(Sic) El amparista continúa afirmando en su argumentación en forma imprecisa: "...Durante el período comprendido al menos del mes de marzo del año 2,014 hasta el mes de abril de 2,015 mes y año en el que se ejecutan órdenes de aprehensión en contra de integrantes del caso denominado "La Línea" derivado de un hallazgo inevitable se logra establecer que paralelamente a La Línea existía una asociación delictiva, dividida funcionalmente en dos grupos: el Primer integrado por altos funcionarios de la Superintendencia de Administración Tributaria SAT (...) y de personas como ALFREDO MUÑOZ LEDO-CARRILLO, MARIO ROBERTO LEAL CASTILLO (...) y probablemente FELIPE ALEJOS LORENZANA, estos últimos cuatro, realizaban el ofrecimiento a diversos empresarios exportadores de un portafolio de servicios que consistía en la gestión de ilícitos ante la Superintendencia de Administración Tributaria para agilizar sus solicitudes de devolución de crédito fiscal (...) a cambio de lo cual cobraban a sus clientes, los exportadores beneficiarios de las devoluciones de crédito fiscal, exorbitantes comisiones ilícitas, que al final y de común acuerdo repartían entre las distintas personas ya antes indicadas, FELIPE ALEJOS LORENZANA en particular, en concreto con GEOVANI MARROQUIN NAVAS y por su conducto con los servidores de la Superintendencia de



53 *ph* 4

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

Administración Tributaria referenciados (...)" (Sic) Además, añade: "...de igual modo FELIPE ALEJOS LORENZANA pudo haber actuado como intermediario, a través de GEOVANI MARROQUÍN NAVAS, quien prevalido del vínculo que éste último tenía con servidores de la Superintendencia de Administración Tributaria (...) de igual forma Alejos Lorenzana pudo en forma directa haber solicitado y aceptado un beneficio económico al que se le denominaba tarifa de éxito, teniendo como propósito utilizar la influencia real de GEOVANI MARROQUÍN NAVAS respecto de servidores de la Superintendencia de Administración Tributaria, que integraban la organización criminal (...) esto con la finalidad de obtener beneficios indebidos para terceros, saltándose el orden cronológico de resolución de las solicitudes de crédito fiscal (...)". (Sic)

Hago constar que, en forma continua en el memorial de interposición de Recurso Constitucional de AMPARO, la entidad solicitante Amparista propone como Pruebas una serie de suposiciones de hecho, que reafirman continuamente, contra el denunciado FELIPE ALEJOS LORENZANA, como supuesta parte integral de una relación criminal con otras personas mencionadas quienes sufren del Proceso penal porque existen Pruebas de Derecho en contra de tales. Nuevamente en forma textual copio: "...y es que en torno a la Superintendencia de Administración Tributaria existió un complejo sistema criminal, del que el señor GEOVANI MARROQUÍN NAVAS fue eje fundamental y del que también pudo haber formado parte FELIPE ALEJOS LORENZANA (...)". (Sic) Añade textualmente: "...información, que evidencia su relación asociativa-criminal con servidores públicos de la Superintendencia de Administración Tributaria y agentes externos intermediarios, para el caso específico con quien se supone es FELIPE ALEJOS LORENZANA, a quien en una interceptación telefónica se refiere con el sobrenombre de "Filipao" (...)".



(Sic) En forma inconstitucional se aprecia lo siguiente, argumentado por el Amparista, que textualmente dice: *"Honorable miembros de esta Corte de Constitucionalidad será a caso esto impartir justicia, es el cuestionamiento que surge al ver este tipo de acciones que desarrolla la segunda corte más importante del país, burlándose de esta manera de los preceptos legales a los que nos encontramos sujetos todos los funcionarios públicos y sobre todo quienes tienen el deber constitucional de impartir justicia (...)".* (Sic)

Por último en la Argumentación quiere adoptar el modelo impositivo de revisión de las Acciones definidas en Procesos, pretendiendo que la HONORABLE CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD se constituya en Instancia Revisora, violentando los Preceptos, Garantías y Principios Constitucionales; en forma textual dice: *"Por lo antes expuesto el Ministerio Público considera que el Pleno de la Corte Suprema de Justicia, al emitir la resolución de fecha veinte de mayo del año dos mil diecinueve que ha de constituir el acto reclamado, se excede en el ejercicio de sus facultades y vulneró los derechos al debido proceso así como limita el ejercicio de la acción y persecución penal, ya que la decisión asumida carece de la debida fundamentación, en la que se realice un razonamiento lógico-jurídico, además excediéndose en sus atribuciones al solicitar al Ministerio Público aspectos propios de un proceso penal cuando apenas se está conociendo la solicitud de Antejudio en contra de Felipe Alejos Lorenzana. (...)".* (Sic)

En el transcurso de la investigación y diligencias del JUEZ PESQUISIDOR, la entidad ahora amparista, procedió con afán y agrado en apoyo al trámite del mismo. No obstante los resultados no le son adecuados, ni convenientes con sus fines se pronuncian por la vía de la ACCIÓN CONSTITUCIONAL DE AMPARO para la revisión de los distintos procesos que mencionan como medios de prueba, en el apartado del



54 *pt* 5

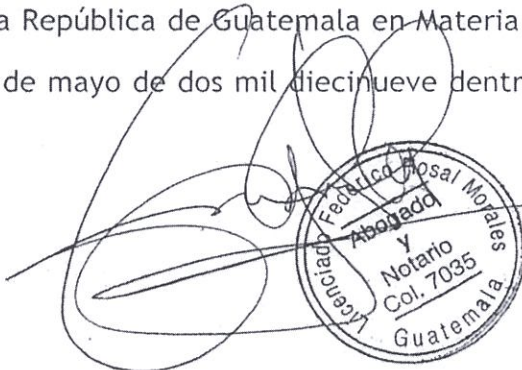
CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

memorial de amparo, denominado **"PRUEBAS"**. Es decir, la intención del solicitante Amparista es que se instituya a favor del MINISTERIO PÚBLICO, al RECURSO EXTRAORDINARIO Y CONSTITUCIONAL DE AMPARO como un proceso de revisión y proceso de conocimiento.

La CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, en cumplimiento con las leyes vigentes y positivas aplicó lo que de conformidad con la Ley en Materia de Antejuiicio es el objeto de la misma Ley, que consiste en crear y aplicar los procedimientos para el trámite de las diligencias de antejuiicio que se deben ventilar de conformidad con el ordenamiento jurídico de Guatemala. El Antejuiicio es un Derecho y la garantía que la Constitución Política de la República otorga a los dignatarios y funcionarios públicos de no ser detenidos ni sometidos a procedimiento penal ante los órganos jurisdiccionales correspondientes, sin que previamente exista declaratoria de autoridad competente que ha lugar a formación de causa, de conformidad con las disposiciones establecidas en la Ley en Materia de Antejuiicio.

En consecuencia, el fallo ahora impugnado por Recurso de Amparo, emitido por la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA el veinte de mayo de dos mil diecinueve dentro del Expediente de ANTEJUICIO Número setenta y uno guion dos mil dieciocho (71-2018), cumplió con la argumentación y fundamentación necesarias de conformidad con el ordenamiento jurídico de la República de Guatemala.

Honorables Magistrados de la Corte de Constitucionalidad constituida en Tribunal Extraordinario de Amparo, En mi calidad de PRESIDENTE DEL ORGANISMO JUDICIAL Y DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA, Respetuosamente comparezco a evacuar la audiencia conferida, en tiempo dentro del plazo legal; que habiendo cumplido con el ordenamiento jurídico de la República de Guatemala en Materia de Antejuiicio en la resolución de fecha veinte de mayo de dos mil diecinueve dentro del Expediente



de Antejuicio número setenta y uno guion dos mil dieciocho (71-2018), el Recurso de Amparo intentado queda sin Materia ni cumple con los Presupuestos Procesales que ordena la Ley; en su oportunidad procesal se declare SIN LUGAR el amparo promovido.

MEDIOS DE PRUEBA:

Documentos que en original se remiten a la Honorable Corte de Constitucionalidad en cumplimiento de la resolución de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve, que consisten en: a) expediente original de Antejuicio número setenta y uno guion dos mil dieciocho (71-2018), que consta de siete (7) piezas en mil trescientos veintidós (1322) folios. (Todos documentos originales); b) Discos compactos originales que obran a folios ciento noventa y uno (191), seiscientos sesenta y dos (662), seiscientos noventa y siete (697), setecientos treinta y cuatro (734), setecientos treinta y nueve (739), y mil ciento noventa y seis (1196). (Documentos en original).

FUNDAMENTO DE DERECHO:

Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad, el Artículo 8º., regula: "El amparo protege a las personas contra las amenazas de violaciones a sus derechos o restaura el imperio de los mismos cuando la violación hubiere ocurrido. No hay ámbito que no sea susceptible de amparo y procederá siempre que los actos, resoluciones, disposiciones o leyes de autoridad lleven implícitos una amenaza, restricción o violación a los derechos que la Constitución y las leyes garantizan".

Artículo 33, establece: "Los jueces y tribunales están obligados a tramitar los amparos el mismo día en que les fueren presentados, mandando pedir los antecedentes o en su defecto informe circunstanciado a la persona, autoridad, funcionario o empleado contra el cual se haya pedido amparo, quienes deberán



55 (211)

6

CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

cumplir remitiendo los antecedentes o informando dentro del perentorio término de cuarenta y ocho horas, mas el de la distancia, que fijará el tribunal en la misma resolución, a su prudente arbitrio".

Con base en lo manifestado, respetuosamente,

SOLICITO:

1. Se admita para su trámite el presente escrito y documento adjunto, y se agregue a sus antecedentes.
2. Que se tenga acreditada y se reconozca la calidad con la cual actúo de conformidad con la representación que acompaño.
3. Que se tome nota de que actúo bajo la Dirección y procuración del Abogado que me auxilia.
4. Que se tome nota del lugar que señalo para recibir notificaciones.
5. Que se tome nota que dentro del plazo legal, en la calidad con que actúo estoy evacuando la audiencia otorgada a la CORTE SUPREMA DE JUSTICIA y se remiten los documentos requeridos en original, en cumplimiento a la resolución de esa Corte de fecha veintiuno de junio de dos mil diecinueve.
6. Se tengan por ofrecidos e individualizados los medios de prueba propuestos.

DE FONDO:

Que al dictarse Sentencia de Amparo se deniegue el amparo solicitado por el MINISTERIO PÚBLICO, por medio de la Fiscalía Especial contra la Impunidad -FECI-, por INEXISTENCIA DE AGRAVIOS dado que, la AUTORIDAD DENUNCIADA ACTUÓ sin violentar los derechos aducidos por el amparista Y DENTRO DEL ÁMBITO DE LAS ATRIBUCIONES que le confiere la Constitución Política de la República de Guatemala, la Ley en Materia de Antejuicio y la Ley del Organismo Judicial.

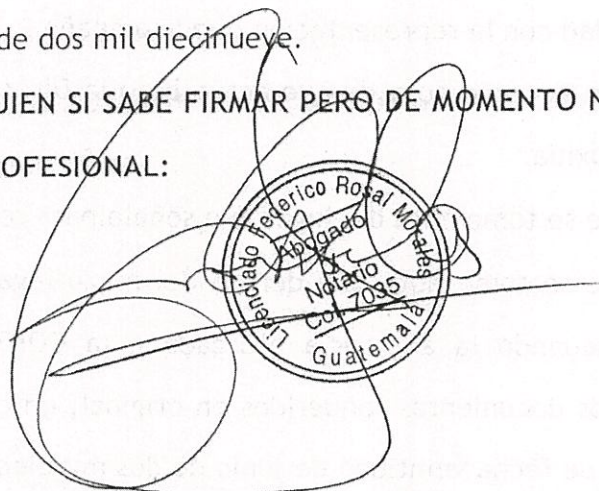


CITA DE LEYES. Artículos citados y 12, 28, 203, 204, 205, 206, 214, 265 y 268 de la Constitución Política de la República. Artículos 1, 3, 4, 7, 9, 11, 20, 33, 34, 35, 42, 43, 44 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad. Artículos 1, 2, 5, 7, 10, 15, 26, 29, 35, 47 del Acuerdo 1-2013 de la Corte de Constitucionalidad. Disposiciones Reglamentarias complementarias a la Ley de Amparo, Exhibición personal y de Constitucionalidad. Artículos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 15, 16, 51, 52, 54 y 55, de la Ley del Organismo Judicial.

Adjunto doce (12) copias del presente memorial y documento de personería. Adjunta el expediente y documentación en original, descritos en el apartado correspondiente.

Guatemala, veintiséis de junio de dos mil diecinueve.

A RUGO DEL PRESENTADO QUIEN SI SABE FIRMAR PERO DE MOMENTO NO PUEDE HACERLO; Y EN SU AUXILIO PROFESIONAL:



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
SECRETARÍA GENERAL

RECIBIDO
27 JUN 2019

HORA: 12:10 F.



56 (pm)

LA INFRASCRITA SECRETARIA DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA

CERTIFICA:

Que para el efecto tiene a la vista, el acta número cincuenta y tres guion dos mil dieciocho (53-2018) de fecha trece de octubre de dos mil dieciocho, de la sesión celebrada por la Corte Suprema de Justicia, que copiada literalmente dice:

“Acta 53-2018. En la ciudad de Guatemala, el trece de octubre de dos mil dieciocho, a las dieciocho horas, reunidos en la Sala de Vistas de la Corte Suprema de Justicia, integrada por Magistrado Presidente: José Antonio Pineda Barales; Magistrada Vocal Primera, Silvia Patricia Valdés Quezada; Magistrado Vocal Segundo, Nery Osvaldo Medina Méndez; Magistrada Vocal Tercera, Vitalina Orellana y Orellana; Magistrada Vocal Cuarta, Delia Marina Dávila Salazar; Magistrado Vocal Quinto, Josué Felipe Baquix Baquix; Magistrado Vocal Sexto, Sergio Amadeo Pineda Castañeda; Magistrada Vocal Octava, Silvia Verónica García Molina; Magistrado Vocal Noveno, Nester Mauricio Vásquez Pimentel; Magistrado Vocal Décimo, Ranulfo Rafael Rojas Cetina; Magistrada Vocal Décima Segunda, María Eugenia Morales Aceña; y la Secretaria de la Corte Suprema de Justicia, Cecilia Odethe Moscoso Arriaza de Salazar, y altos dignatarios de la nación, a efecto de celebrar sesión solemne de toma de posesión del Magistrado Vocal Noveno, Nester Mauricio Vásquez Pimentel; como Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, se procede de la siguiente manera: **PRIMERO:** El Señor Presidente saliente, José Antonio Pineda Barales, abre la sesión. **SEGUNDO:** La Señora Secretaria, abogada Cecilia Odethe Moscoso Arriaza de Salazar, conforme al ceremonial correspondiente, da lectura al punto **CUARTO**, del Acta número Cuarenta y siete – dos mil dieciocho, de la sesión extraordinaria de Pleno de fecha veinticuatro de septiembre de dos mil dieciocho, el que copiado literalmente dice: “...**CUARTO:** Después de la votación respectiva, el Magistrado Presidente José Antonio Pineda Barales, manifiesta que se cumple con la mayoría calificada y por lo tanto con las dos terceras partes que establece la Constitución Política de la República de Guatemala, razón por la cual las Señoras y Señores Magistrados declaran electo al Magistrado Vocal Noveno, **NESTER MAURICIO VÁSQUEZ PIMENTEL**, como Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, para el período dos mil dieciocho - dos mil diecinueve...”. **TERCERO:** El Presidente del Congreso de la República, Diputado Álvaro Enrique Arzú Escobar, en cumplimiento del punto de acta de número y fecha referido con anterioridad, y lo preceptuado en la literal b) del artículo 165 de la Constitución Política de la República de Guatemala, da posesión efectiva del cargo de Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia al abogado **NESTER MAURICIO VÁSQUEZ PIMENTEL**. **CUARTO:** El Magistrado Presidente del Organismo Judicial y de la Corte Suprema de Justicia, José Antonio Pineda Barales, hace formal entrega del cargo al Magistrado Vocal Noveno, **NESTER MAURICIO VÁSQUEZ PIMENTEL** así como del medallón, botón y mallette, insignias que representan su alta investidura. **QUINTO:** Se termina la presente en el mismo lugar y fecha de su inicio treinta minutos más tarde. Se suscribe por el Presidente, Magistradas y Magistrados de la Corte Suprema de Justicia, altos dignatarios del país que en ella intervinieron y la Secretaria..... (Aparecen las firmas respectivas)”. Y para remitir a la Asesoría Jurídica del Organismo Judicial, extendiendo, sello y firma la presente en la ciudad de Guatemala, el veinticuatro de junio de dos mil diecinueve.

M.A. Dora Lizett Najera Flores
Secretaria de la Corte Suprema de Justicia



57 p. 100

PRUEBA

No. 4



CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD
REPÚBLICA DE GUATEMALA

EXPEDIENTE 3488-2019 Of. 7
Ref: 71-2018



3184.2020

En la ciudad de Guatemala, el veinticuatro de enero del año
DOS MIL VEINTE, a las quince horas con veintiuno
minutos, en la **veintiuna calle, siete-setenta, zona uno**, notifico
Resoluciones de fechas **VEINTE DE ENERO DE DOS MIL VEINTE,
DIECISEIS DE ENERO DE DOS MIL VEINTE, VEINTIUNO DE ENERO
DE DOS MIL VEINTE**

A: Corte Suprema de Justicia

por medio de cédula de notificación que contiene las copias de ley y que entrego
a: Rosalinda Bautista

Quién de enterado: [Signature] firmó.

DOY FE: [Signature]

Consta de 16 folios.
3P

No se llevó a cabo la notificación por la causa siguiente

- | | | |
|---|---|---|
| <input type="checkbox"/> Dirección Inexacta | <input type="checkbox"/> No existe la dirección | <input type="checkbox"/> Persona a notificar falleció |
| <input type="checkbox"/> Lugar desocupado | <input type="checkbox"/> Persona fuera del país | <input type="checkbox"/> Datos no concuerdan |

RAZÓN:

japaricio

jparedes

Notificador:

Fecha Asignación:

1/13-2019

59 (P207)

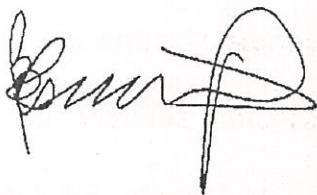
Expediente No. 3488-2019

Oficial 7° de Secretaría General.

Asunto: Amparo en única instancia. **Solicitante:** Ministerio Público, por medio de la Fiscalía Especial Contra la Impunidad. **Autoridad denunciada:** Corte Suprema de Justicia.

CORTE DE CONSTITUCIONALIDAD, EN CALIDAD DE TRIBUNAL EXTRAORDINARIO DE AMPARO: Guatemala, veintiuno de enero de dos mil veinte.

I) Se abre a prueba el amparo por el improrrogable término de ocho días. II) Por no existir hechos que pesquisar de oficio, no se hace ningún pronunciamiento al respecto. Artículos: 7° y 35 de la Ley de Amparo, Exhibición Personal y de Constitucionalidad; 28 y 29 del Código Procesal Civil y Mercantil.



Firmado digitalmente por
BONERGE AMILCAR
MEJIA ORELLANA
Fecha: 21/01/2020
6:48:27 p. m. Razón:
Aprobado Ubicación:
CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD



Firmado digitalmente por
MARTIN RAMON
GUZMAN HERNANDEZ
Fecha: 21/01/2020
7:15:37 p. m. Razón:
Aprobado Ubicación:
CORTE DE
CONSTITUCIONALIDAD